

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 20° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-4212-2022
CARATULADO	: SERRANO/FISCO DE CHILE - CDE

Santiago, catorce de Abril de dos mil veintitrés

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE

Al folio 1, comparece don Nelson Guillermo Cauco Pereira, abogado, domiciliado en pasaje Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1104, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, actuando en representación de doña Heddy Olenka Navarro Harris, escritora, profesora y pensionada, domiciliada en calle Las Canteras N°15, camino a Niebla, comuna y ciudad de Valdivia, Región de los Ríos; doña Paulina Andrea Muñoz Navarro, actriz y docente, domiciliada en calle Santa Mónica N° 8.354, comuna de La Florida, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; doña Tania Maipe Muñoz Navarro, artista visual, domiciliada en Stadium Dos, casa N° 4, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana; y, don Bruno Renato Serrano Navarro, profesor, domiciliado en calle Las Canteras N° 15, camino a Niebla, comuna y ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos; quien interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios, en juicio ordinario de hacienda, en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1.225, piso 4, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

Al folio 7, consta la notificación al demandado.

Al folio 8, se contestó la demanda.

Al folio 11, se evacuó la réplica de la parte demandante.

Al folio 13, se evacuó la réplica de la parte demandada.

Al folio 14, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que rolan en autos, notificándose a las partes con fecha 18 de enero de 2023.



Foja: 1

Al folio 30, se rindió prueba testimonial.

Al folio 34, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO.

EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO: Que, en audiencia de fecha 10 de febrero de 2023, el demandado opuso tacha contra la testigo doña Guillermina Alicia Gariazzo Gavilán, alegando que concurre a su respecto la causal contenida en el N°7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, atendido el grado de amistad del que da cuenta la testigo en su declaración.

SEGUNDO: Que, la parte demandante se opuso a la tacha indicando que para la concurrencia de la tacha deducida, se necesita un grado mayor de estándar que logren deducir que la testigo tiene nublada la verdad o se corrompen los hechos de su declaración, producto de dicha amistad.

Agrega, que para satisfacer dicho estándar, se requieren mayores antecedentes que los aportados por los dichos de la testigo.

TERCERO: Que, el artículo 358 N°7 dispone que: *“Son también inhábiles para declarar:*

7°. Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaren.

La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias”.

Que, en esta línea, la causal del N°7 del artículo 358 del código procesal mencionado, se funda en la desconfianza que el legislador anticipa sobre el testimonio de quien se encuentra sujeto a un vínculo íntimo de amistad con la parte que lo presenta, entendiendo que dicha amistad le privará de la libertad para dar un testimonio fidedigno sobre los sucesos que dice haber percibido.

En este sentido, la misma norma invocada por la demandada requiere explícitamente que la amistad o enemistad se manifieste por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias, cuestión que no ocurre en la especie, ya que si bien la testigo expresó ser amiga de la demandante desde la



Foja: 1

universidad, también reconoce que en los últimos años no se ha visto con ella, no señalando por ende, circunstancia alguna que permita calificar de íntima tal amistad; lo que conduce a rechazar la tacha en estudio, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

A mayor abundamiento, no se han manifestado los hechos en que se hace consistir la íntima amistad del testigo con la parte que lo presenta, que permitan al Tribunal calificar la gravedad de tales hechos para tener, con su mérito, por probada la tacha, ya que no es bastante para ello que la testigo declare ser amiga de la demandante, atendido que de su declaración no se desprende que la amistad sea íntima, como lo exige la disposición alegada. El concepto de amistad íntima que se exige para legitimar la tacha, es más amplio que el de simple amistad, debiendo justificarse por hechos externos y no sólo por el reconocimiento expreso del testigo. De acuerdo a lo expresado, se considera que de los dichos de la testigo no surgen estos elementos para configurar la tacha.

Cabe destacar, que la demandada debe señalar expresamente los hechos en qué consiste esa amistad íntima, a fin de que esta sentenciadora pueda calificarlos y apreciarlos para los efectos de determinar si se configura o no la inhabilidad alegada, exigencias que la demandada no ha cumplido a cabalidad, limitándose solamente a formular la tacha e invocar su causal.

EN CUANTO AL FONDO:

CUARTO: Que, la parte demandante expresa que doña Heddy Olenka Navarro Harris nació el 18 de octubre de 1944.

Agrega, que doña Paulina Andrea Muñoz Navarro, doña Tania Maípe Muñoz Navarro y don Bruno Renato Serrano Muñoz, también demandantes, son hijas e hijo, respectivamente, de doña Heddy Olenka Muñoz Navarro.

Afirma que doña Heddy Olenka Navarro Harris ha sido reconocida como víctima de prisión política y tortura por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I. Precisa, que su nombre ha sido incluido en el numeral 16.623 de la nómina de víctimas reconocidas por dicha comisión de verdad.

A continuación, cita el relato de los hechos sufridos por doña Heddy Olenka Navarro Harris:



Foja: 1

“El día 15 de agosto de 1974, salí de la casa de mis padres ubicada en la comuna de San Miguel y me dirigí en mi pequeño auto NSU a la casa de mi suegra con la intención de pasar a buscar a mis dos hijas, quienes pasaban la tarde con su abuela paterna doña Olga Martínez de Muñoz. Me estacioné en la calle Rey Alberto casi en la esquina de Florencia, frente a su casa, y me bajé para recogerlas. Allí, se encontraban Tania, la menor de tres años y medio, quien estaba dormida, y Paulina, la mayor, que quería quedarse con su abuela y con su tía más tiempo. Acordamos que me llevaría dormida a Tania y que Paulina se quedaría a dormir con su abuela. En ese entonces yo vivía con mis padres, en el mismo barrio varias cuadras más al sur, en la calle Teresa Vial.

Tomé a mi hija pequeña en brazos, la tapamos con un chal o chaqueta, no recuerdo, y me despedí de mi suegra e hija que en breve cumpliría los 7 años, acordando en que la pasaría a buscar a la mañana siguiente. Acomodé a Tania en el asiento sin despertarla, me dispuse a partir, pero no encontré el llavero dentro de mi cartera por lo que me dispuse a volver, recordando que se me había quedado en la mesita de entrada en la casa de mi suegra; cuando me iba a bajar a buscarlas, vi a una mujer, Luz Arce, quien me golpeaba el vidrio y me saludaba. Le pregunté a continuación la razón de su presencia, a lo que me replicó que andaba con unos “primos” de paseo y que quería saber de Sergio Muñoz, mi esposo, ya exiliado en Argentina y del cual me encontraba separada de hecho desde octubre del año anterior. Me dio explicaciones, de que había estado presa y de que ahora ya libre necesitaba comunicarse con él. Luego, nos despedimos y yo volví a la casa, explicándole a mi suegra lo sucedido y mi preocupación, le dije que si me seguían volvería de inmediato, limitándome a dar vuelta a la manzana y volviendo rápidamente al auto.

Eché a andar el motor, y mi suegra y cuñada se quedaron en la vereda mirándome. Al mismo tiempo que doblaba hacia San Ignacio, pude ver que la camioneta estacionada unas 3 casas más al sur de la misma cuadra también se movía rápidamente. Entonces, decidí volver y apuré la marcha, pero solo alcancé a recorrer parte del trayecto pues fui interceptada por la camioneta, mediante el bloqueo de la calle.

Bajó de dicha camioneta un sujeto que me mostró una tarjeta que decía SIM y tapó su nombre. Me indicó que debía bajarme y abrió violentamente la puerta, sacándome de un brazo y haciéndome caminar a grandes trancos hasta la camioneta que, según recuerdo, bloqueaba la calle Ruiz Valledor con salida a Salesianos. Me instalaron en la cabina, junto a un individuo gordo, también estaba



Foja: 1

Luz Arce y otro individuo. Supe después que ese individuo gordo era Osvaldo Romo, agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, y jefe de ese equipo, que quería hablar conmigo sobre "Cochín" (sobrenombre de Sergio Muñoz) y que les indicara dónde vivía para llevar a mi hija que nos seguiría en el auto manejado por el otro agente, el tal "Troglo", que correspondía a Basclay Zapata, también ex agente de la DINA. Les respondí que mejor volviéramos a casa de mi suegra. Así lo hizo.

Al dar vuelta por la calle Salesianos y volver hacia el norte por calle Rey Alberto, estaban en la puerta mi suegra y mi cuñada, quienes le preguntaron a Osvaldo Romo por qué me habían detenido. Ante ello, este "las tranquilizó" entregándoles a mi pequeña dormida. Entregué a mi cuñada, también mi cartera, un pañuelo y mis documentos, mientras él daba explicaciones a mi suegra. No recuerdo cuántos minutos pasaron, ni si mi hija seguía dormida, solo percibía la urgencia de que quedara protegida por ellas y se acabara el terrible momento.

Me fui con ellos, dejando a mi hija a salvo y sin saber que en la parte de atrás iban muchos otros y otras personas socialistas detenidas. Eso lo supe después.

Fue así como el siniestro vehículo oscuro, se alejó conmigo adentro. Lo bueno es que mi hija menor quedó segura junto a su abuela, tía y hermana.

La promesa del hombre gordo no se cumplió. Seguimos de largo, dejando atrás la plaza donde habían dicho que me iban a dejar luego de interrogarme, o como dijo el Guatón Romo, "a hacerme unas preguntas".

No recuerdo cuánto duro el viaje, pero sé que este vehículo se detuvo varias veces. En una de las paradas, Luz Arce se bajó junto a otro agente y pidió un arma; el Guatón Romo se la entregó, riéndose. Ahí me quedé por eternos minutos con el Guatón Romo, mientras me decía que iban a buscar a mi amigo "Goyo", mientras me preguntaban si sabía dónde estaba. Al pasar el tiempo supe que se referían a Gregorio Gaete, quien a la fecha se encuentra desaparecido. Lo detuvieron esa misma noche, es decir, se encontraba en la misma camioneta, en la parte de atrás junto a muchos, entre los cuales se encontraba su amigo Alejandro Espejo Gómez, un joven de 17 años, de las Juventudes Socialistas, que yo conocía y a quien vi en Cuatro Álamos.

Después de esta parada, nos dirigimos por calle Bulnes hacia la Alameda. Casi al llegar, uno de mis aprehensores dijo que lo "mejor sería que me pusieran una venda en los ojos, pues en caso contrario podrían sancionarlos". Después de



Foja: 1

ponerme una cinta amplia roja por no encontrar otra, anduvimos unas tres cuadras y llegamos al lugar en que me mantendrían por algunos días. Puedo decir con certeza de que se trataba del lugar de tortura ubicado en calle Londres 38.

Desde el primer día estuve vendada con esa cinta roja, lo que me permitió ver al trasluz siluetas. Veía todo de color rojo. Ellos se dieron cuenta, por lo que me pusieron algodones y me ajustaron más la venda. Unos minutos más tarde entramos por algunas calles laterales. Todo el tiempo estuve en ese estado. Osvaldo Romo me hablaba y yo respondía sobre lo inapropiado de mi detención, ya que ellos buscaban a mi esposo, del cual me encontraba separada, y que estaba en el extranjero. Se daba comienzo así a la privación de libertad a la que estuve sometida por aproximadamente dos semanas. Finalmente, llegamos a la calle Londres, donde me dijo el mismo sujeto que yo sabía dónde iba, puesto que allí yo era una dirigente, pues era el ex local de la Octava Comuna del Partido Socialista.

Al llegar comenzaron las amenazas y escuché a muchos otros. Sentía su presencia, pasos, carrasperas. Se los llevaron a otras salas y a mí me llevaron a la pieza que daba a la calle Londres, sala que conocía perfectamente ya que yo tenía reuniones con el resto de la directiva comunal socialista, siendo parte del Secretariado Político, en el rol de encargada de mujeres en tiempos previos al Golpe de Estado. No me encontraba participando a la fecha en ningún partido, no pensaba más que en cuidar a mis hijas y estar en paz.

La primera noche me interrogó Osvaldo Romo. Me mostró un cuaderno con fotos de jóvenes militantes socialistas, recuerdo que me dijeron que yo los conocía. Fue duro saber que me pedían ir a entregar sus casas, buscarlos, en fin. Gracias a que no conocía el lugar en que vivían ni sus nombres, el “Guatón Romo” me dejó en paz por esa noche.

Pasaron varios días; estuve siempre en una sala grande, junto a muchos otros, hombres y mujeres. En todo momento estuvimos custodiados por otros guardias y sin comer. Recuerdo que un domingo nos trajeron una “sopa” fría, era un solo plato y una cuchara que pasó por cada uno de nosotros. Quedé con la sensación de que era agua salada y sucia y con quizás qué más, pero me la tomé toda, era una miserable cantidad en un plato, 4 cucharadas o algo más. No recuerdo haber comido nada más en todos esos días. Tampoco vi a nadie través de la venda, lo que sí pude ver en esa penumbra fue que el recinto estaba lleno, deben haber



Foja: 1

sido entre 40 y 60 personas por el tamaño de ese viejo salón, donde se reunían en asamblea los militantes del Partido Socialista del sector.

En todos esos días no recuerdo haber ido al baño, salvo una vez, una mañana en que solicité ir al baño y me llevaron. El guardia se quedó mirando todo el rato que estuve sentada en la taza del WC. Lo veía a través de mi venda roja ya que nunca me la cambiaron, eso me permitió estar alerta y, de alguna manera, sentir que aún era alguien, que aún existía. Tampoco pude asearme en todos esos días, ni evacuar los intestinos. Estaba preocupada por mi embarazo y porque no sabían que yo tenía una nueva pareja, esperaba que no supieran; él también había estado preso en el Estadio Nacional y fue dejado en libertad. Esto me preocupaba mucho porque nadie sabía que yo tenía pareja, ni que estaba embarazada de dos meses al momento de caer detenida, mejor dicho, secuestrada.

Posteriormente, me llevaron a un salón grande en el cual procedieron a sacarme la cinta que cubría mis ojos y me dejaron a solas con Luz Arce. Ella me dijo que lo mejor era que yo hablara, que esa "recomendación" me la daba para mi bien y que diera toda la información que poseía o, de lo contrario, traerían a mi hija Paulina para que yo hablara. Este "detalle" fue para mí una de las mayores amenazas y maltrato que sufrí ese espantoso día. Sentí terror, supe que ella no era amiga ni compañera y que este papel lo disfrutaba. Le dije que ella sabía que yo solo había trabajado en actividades con mujeres y que tres meses antes del 11 de septiembre de 1973 había dejado de desempeñar el cargo de secretaria del Frente Femenino.

Luz Arce me dijo que eso lo sabían y que no les interesaba; lo que querían saber era dónde ubicar a Marcos. Le expliqué que yo no sabía cómo tomar contacto con Marcos, pues era él quien en algunas oportunidades se comunicaba telefónicamente para preguntar acerca de mí, su ex cónyuge, a la casa de su madre. Me dijo que por el bien de mis hijos lo mejor sería que llamara a casa de mis suegros para decirles que yo me encontraba bien y que si llegaba a llamar Marcos, le señalara un lugar para juntarnos. Acepté hacer el llamado, pues pensé que era la única posibilidad de comunicarme con mi familia y confirmarles que me encontraba detenida. Llamé, aunque sabía que Marcos no me llamaría a ese teléfono, pues ignoraba si lo conocía. Así lo hice y conversé con mi suegra dándole el mensaje que me habían pedido que "transmitiera". Después de efectuado el llamado me dijeron que me había portado bien, y que Marcos era la persona más peligrosa del Partido Socialista. Me dieron un cigarrillo y procedieron a vendarme nuevamente. Me llevaron a otro lugar, dentro del mismo recinto y allí



Foja: 1

me dejaron. Pese a estar vendada, pude darme cuenta de que en el lugar mantenían, a lo menos, a unas ochenta personas en calidad de detenidas.

Permanecí en la pieza que me dejaron alrededor de unos cinco días. Durante ese tiempo hubo un gran revuelo en el lugar, motivado por el hecho de que una de las personas a quien mantenían detenida había sido sacada con el objeto de que reconociera a otras personas que iban a detener, logrando escapar en plena calle de los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esto lo supe pues gritaban e insultaban. Esta huida, motivó que las personas que trabajaban directamente a cargo de Osvaldo Romo se hicieran cargo de la mayoría de los prisioneros que allí nos encontrábamos. Cuando pregunté acerca del día que quedaría en libertad, me respondieron que tenían muchas cosas que hacer y que a mí no se me dejaría en libertad en tanto no atraparan a Marcos.

Tras cinco o seis días de permanecer detenida en el centro de detención y tortura de Londres 38, llegó hasta el lugar una persona que determinó qué personas se irían de ese lugar y quiénes no. Se nos explicó que pronto llegaría una Comisión de Derechos Humanos y que, por esa razón, tenían que desocupar el lugar. También, se nos explicó que temían que el lugar podía ser asaltado por la gente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, por lo cual resultaba conveniente salir de allí. La persona que determinaba quiénes se quedaban y quiénes se iban, fue preguntando respecto de cada uno de los detenidos sobre que cargos que se le imputaban. Escuché que mencionaban el nombre de Oscar Castro Videla y muchos otros nombres más. Cuando tocó mi turno, me formularon el cargo de ser correo internacional. Un rato después, hacinados en el interior de la parte posterior de una camioneta cubierta con toldo, fuimos sacados del lugar y trasladados vendados a un lugar desconocido. Pese a estar vendada con la misma cinta, pude darme cuenta de que estaba muy claro, por lo que pienso que era alrededor del mediodía.

Pude darme cuenta de que doblábamos por Alameda hacia el oriente y subíamos posiblemente por Irarrázaval u otra calle paralela a Alameda, hasta llegar a una calle con árboles tipo plátanos orientales que lograba ver, desde mi rincón, apostada hacia atrás. Después supe que era otro recinto de detención y tortura llamado Cuatro Álamos. Al llegar nos dejaron de espaldas a un patio contra una muralla de cemento y, a continuación, nos tomaron huellas digitales y nos chequearon de algún modo. Luego, y a medida que nos introducían a un pabellón con celdas de dos camarotes, nos fueron sacando las vendas de los ojos. Alcancé a distinguir entre las personas que habían sido trasladadas junto conmigo a Muriel



Foja: 1

Dockendorff Navarrete, con la cual después tuve oportunidad de conversar; ella me dio su nombre y un papel para entregarlo a su familia, pidiéndome que informara que se encontraba allí, en la eventualidad que yo quedara en libertad. Sé que ella no logró salir con vida de esta brutal experiencia, a pesar de estos esfuerzos que hicimos varias personas detenidas en ese recinto.

Estando en Cuatro Álamos, tuve oportunidad de conocer a una pareja de hermanos, Hernán Galo y María Elena, ambos González Inostroza. Pude conversar con María, quien me contó que había sido detenida el 15 o 16 de agosto de 1974, junto a otras personas, entre ellas, su hermano, en el departamento en que habitaban. Me contó que su detención se había efectuado con el auxilio de personal de Carabineros y funcionarios de Dirección de Inteligencia Nacional. Con María Elena, pude conversar, a lo menos, en cuatro o cinco oportunidades, entre los días 21 y 27 de agosto de 1974.

Debo señalar que antes de ser trasladada desde Londres 38 a Cuatro Álamos hubo una oportunidad en que me llevaron hasta una casa que, creí en ese entonces, se encontraría en el sector oriente de Santiago, específicamente en la comuna de Ñuñoa. Luego, me enteré de que se trataba del centro de detención de José Domingo Cañas. En esa casa se mantenía a muchas personas detenidas y, pese a estar vendada, pude ver a Rodolfo Alejandro Espejo Gómez, quien también se encontraba detenido, pude identificarlo, puesto que lo conocí cuando militaba en el Partido Socialista. Él también se dio cuenta de mi presencia en el lugar y, disimuladamente, se acercó a mi lado y me recomendó qué me abstuviera de tomar agua, ya que era probable qué me aplicaran corriente eléctrica en los interrogatorios. Agradecí la recomendación. En esa ocasión no fui interrogada por Osvaldo Romo sino por otros dos sujetos en equipo que me preguntaban quién me había detenido, cómo y por qué. Ese día, solo estuve en una pequeña sala con algunos otros detenidos, entre ellos, Oscar Castro Videla, a quien no conocía de antes, mas recuerdo su nombre pues cuando nos llamaron lo dijo. También, tuve que decir mi nombre. Después de algunas horas nos devolvimos al local de calle Londres 38 o se me trasladó a Cuatro Álamos, no lo recuerdo bien.

En dos oportunidades más se me llevó a la misma casa ubicada en el sector de Ñuñoa. En la primera ocasión y por la noche, fui interrogada en una pequeña sala por Osvaldo Romo ante otra persona, la cual con voz muy autoritaria ordenó a Luz Arce que procediera a formular los cargos por los cuales estaba detenida. Luz Arce dijo que en mi casa funcionaba una radio clandestina y que me había visto manipularla con el objeto de comunicarme con los trabajadores de la mina El



Foja: 1

Teniente de Rancagua. Agregó que yo servía como correo internacional. Ante la falsedad de las imputaciones reaccioné con indignación señalando que todas esas afirmaciones eran falsas, tratándola de mentirosa, dando antecedentes de mi trabajo profesional de docente universitaria. Tal situación provocó el enojo de quien escuchaba, alguien que evidentemente era un superior y cuya voz no reconocí como miembro del equipo de la Dirección de Inteligencia Nacional que nos llevaba y traía de un lugar a otro. Este le ordenó a Osvaldo Romo que me sacara de allí. Ya en un pasillo, se me dijo que si quería seguir en pie, debía cooperar con el “jefe”. Posteriormente, y sin llevarme adentro nuevamente, regresamos con el grupo a Cuatro Álamos.

Otro día me llevaron nuevamente a José Domingo Cañas; me tenían atada y vendada, y me llevaron a una pieza en la cual Osvaldo Romo nuevamente me interrogó. También me señaló que podía tomar asiento y que habían averiguado que yo no tenía mayores problemas, y que pronto quedaría en libertad. En medio de este trato, de aparente amabilidad, me cogieron desde atrás por los hombros y con violencia, y alguien intentó quitarme la ropa. Supe que se venía lo peor y que me aplicarían corriente eléctrica. Respondí con fuerza que podía hacerlo sola. Tenía un nudo en el sostén porque había bajado unos 7 kilos. Me saqué la ropa hasta quedar absolutamente desnuda. Tenía sentimientos y pensamientos encontrados y en la confusión de ellos lo que menos temía era el quedar desnuda. Alguien me empujó y sentí el metal en mi cuerpo, y aunque no podía entregar información, pues desconocía absolutamente cualquier cosa que pudiera interesarles, tenía en el pensamiento a mis hijas y al hijo que estaba en mi vientre. Luz Arce, mientras estábamos en la celda de Cuatro Álamos me dijo “qué bueno que no estas embarazada o abortarías cuando te apliquen corriente”.

Era un secreto, el cual percibía como mi mayor peligro. De enterarse de mi embarazo preguntarían por el padre y hasta el momento solo tenían la información entregada por Luz Arce, según la cual mi pareja estaba en el exilio. Eso pensaba mientras le hablaba a esa semilla en mi vientre, a la que con amor le decía que resistiéramos.

Una vez que me desnudé sin permitir que Luz Arce me ayudara, fui objeto de vejaciones sobre todo por parte de Osvaldo Romo, tales como, burlas por mi cuerpo arrugado y enflaquecido y con una gruesa cicatriz de dos cesáreas haciendo notar lo mal tratada que estaba por: ¡Mira cómo te han tratado los marxistas! Y siguió en esa perorata mientras me ataban a una parrilla metálica, una especie de catre que no veía, porque estaba en el sector más oscuro. Al lado,



Foja: 1

había una mesa pequeña con una máquina de escribir y Luz Arce sentada como secretaria. Sentí que ataban mis manos y piernas con cables, y ponían algo duro dentro de mi boca. Una vez en esas condiciones, comenzaron a interrogarme a la vez que Luz Arce tomaba notas a máquina. Quien me interrogó fue el propio Osvaldo Romo. Se me preguntó nuevamente acerca de mi supuesta actividad como correo internacional; la supuesta existencia de una radio clandestina en mi domicilio; y, además, se me interrogó acerca de Marcos y el dinero que decían que yo recibiría desde el extranjero. Al parecer, el interrogatorio se efectuó sólo para ratificar algunas de las respuestas que yo había dado previamente, en los otros interrogatorios. Después del interrogatorio, fui llevada de regreso a Cuatro Álamos.

Recuerdo que el domingo anterior a este interrogatorio, estando yo en Cuatro Álamos, había sido visitada por una persona de civil que me había manifestado que yo quedaría en libertad pronto. Hice presente esta situación a mi llegada a Cuatro Álamos, cerca de las 14:00 horas del día 28 de agosto de 1974. Me llevaron a otra dependencia del mismo recinto, lugar en el cual procedieron a tomarme fotografías y hacerme una ficha, tras lo cual, procedieron a subirme a una camioneta. La persona que antes me había prometido que quedaría en libertad nos advirtió que era mejor que hubiéramos dicho la verdad, ya que en caso contrario, nos pesaría. El vehículo se detuvo en una oportunidad antes de que me ordenaran bajar. Al momento de dejarme en libertad, me sacaron la venda y me dijeron que no me atreviera a voltear para mirarlos. Cuando pude recobrar un poco la visión, supe que me encontraba en avenida Vicuña Mackenna cerca de Rodrigo de Araya, lugar desde el cual tomé un taxi y me dirigí al domicilio de Olga Martínez, donde había comenzado todo.

Al día siguiente, el propio Osvaldo Romo concurrió hasta el domicilio de mis padres, con el objeto de hacer entrega de mis documentos de identificación y del automóvil de mi propiedad. El vehículo fue llevado a remolque y con su motor fundido. Además, debo señalar que todas las herramientas del vehículo fueron sustraídas.

No recuerdo detalles, ni experiencias distintas a que estábamos sentados, vendados y que en la noche recogían las sillas y nos obligaban a dormir en el suelo, apiñados, sin frazadas, solo el piso de madera. Ahora, volviendo a estos recuerdos, me percató que tengo lagunas, que tenía miedo, pero mi cuerpo parece que no existía, aún me afecta mucho, debo haber estado tan asustada que tengo una laguna mental hasta el día de hoy que no logro diferenciar un día de



Foja: 1

otro, ni un episodio de otro. Solo logro recordar a algunos otros detenidos y a algunas otras detenidas, como cuando alguien recibía un golpe, un culatazo, solo por haber levantado la mano para solicitar agua, por ejemplo.

El año anterior de lo relatado, después del “golpe”, nos habíamos separado con mi esposo, Sergio Muñoz Martínez. Él fue detenido en la que era nuestra casa, ubicada en la misma cuadra donde vivían sus padres, y liberado semanas después del Estadio Nacional. Nos separamos después y cada uno siguió su camino. Ya no compartiríamos como matrimonio, especialmente, yo no quería exiliarme y decidí nunca renunciar a mi derecho a vivir en mi país, educar a mis hijas en nuestra cultura, nuestro maravilloso país. Esa lucha la llevé a pesar del miedo, de las carencias, de una especie de volver a empezar que sentía como amenaza permanente.

Así estaban las cosas meses antes del día que me detiene la DINA en plena calle, de la comuna de San Miguel, y que ya he relatado.

Estaba emparejada desde fines de 1973 con quien en febrero de 2008 contraí matrimonio, en el puerto de Corral, y es hasta hoy mi cónyuge y compañero: Bruno Serrano Ilabaca. Tenemos dos hijos, Claudia y Bruno Renato. Fue nuestra decisión volver al sur en 1992 dejando todo atrás, las pérdidas en todo lo ya construido: aspiraciones laborales, profesionales y económicas, y retornar al sur, en una especie de ruta sanadora, de espacio marginal más sacrificado, también más esperanzador. Nada, sin embargo, acalla las voces, los miedos, las lagunas del pensamiento. La cerrazón a ciertos recuerdos; dejar atrás, cerrar puertas, tratar de recordar y también de olvidar.

Me propuse colaborar en todo lo que pudiera para poder devolver a las familias al menos un recuerdo de quien pudo pasar algunos días y experiencias en cautiverio con alguno de sus familiares. Muchas veces he declarado desde que la Vicaría de la Solidaridad nos preguntó a muchos, imagino, si podía declarar en notaría lo que relataba a sus abogados. Era el año 1976 y de ahí hasta el presente lo he seguido haciendo. Aquellos procesos abiertos, donde año tras año he ido contenta de corroborar una fecha, un dato, una esperanza: Alejandro Espejo Gómez, Gregorio Gaete, los hermanos González del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Concepción, Oscar Castro, y tantas más que estuvieron allí y yo no lo supe: no pude sentirlos, escucharlos, nada. No llevo la cuenta, no puedo.

Tengo ya 76 años y la vida está hecha, los cuidados, los deterioros, olvidos, todo. Hubiera querido tener más memoria, aportar a los y las demás que buscarán por



Foja: 1

siempre a sus retoños, amores, progenitores, hermanos. También, quisiera recuperar algo de lo perdido, espiritual y materialmente.

Mis tres hijas y mi hijo han sostenido en sus hombros la pérdida que fue mía, dolor, la ausencia, la esperanza y el pesar los ha marcado. En esta familia se llora, se asiste cada cierto tiempo al apoyo en salud mental que ofrece el PRAIS.

La solidaridad no se ha perdido y tantas otras cosas poderosas que pudimos rescatar. Sin embargo, nos duele esa pérdida esencial. Éramos jóvenes y se nos frenó la esperanza. Por ejemplo, el honor de trabajar en mi propia casa de estudios, la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde alcancé a ejercer docencia apenas un par de años antes. Una carrera truncada casi al inicio. O esos años de vida temerosa, de terror a los pasos de noche o la tristeza que ataca y te encuentra desprevenida, vendada de por vida, oliendo o ignorando, incluso, el daño en el otro, la otra; esa marca que una muchas veces no ve, o no quiere ver. Dos de mis hijas, por ejemplo, estuvieron presas conmigo.

La primera, dormida en el asiento de un auto con un torturador al volante, llevándola, tal vez qué más haciéndole y cómo saberlo. Solo sé de su herida permanente, su vida construida con muchas grietas, depresión, terribles miedos, estudios incompletos, ausencia, fuga. La segunda, en mi vientre: aguantó mucho, porque nunca se supo allí en prisión que yo estaba embarazada, no obstante, al salir libre y refugiarnos por breve tiempo en Buenos Aires, Argentina, sufrimos un principio de aborto que nos mantuvo hospitalizadas e inmóviles en pésimas condiciones de vida, hacinadas en el departamento de mi ex esposo.

Por fin, nació en un hospital argentino y pensar que estuvo conmigo en la camilla de tortura, cuando creí tener tanto frío que saltaba amarrada en la camilla, mientras el torturador me preguntaba “¿tienes miedo que tiritas tanto?” Y yo respondí casi ingenua, casi digna: “¡No!, ¡tengo frío!” y era verdad.

Mi segunda detención ocurrió un día antes de Semana Santa, el año 1989. Con mi pareja íbamos por primera vez de paseo solos. Dejamos a las hijas e hijo a cargo de Paulina, quien en ese entonces tenía 22 años. Salimos temprano de nuestra casa en el barrio de San Miguel, calle Florencia N° 1276, y en auto nos fuimos a nuestras primeras vacaciones juntos. Por aquella época, yo dictaba clases de Artes Plásticas, en el Colegio Francisco de Miranda, en Peñalolén. Nos sentíamos tranquilos y felices.



Foja: 1

Llegamos al puesto fronterizo y debimos pasar nuestras cédulas de identidad que sabíamos era el control exigido a cada pasajero. Luego, nos avisaron que yo debía pasar a las oficinas interiores porque había un problema conmigo. Bruno, mi compañero y hoy también mi esposo se alteró y preguntó de qué se trataba, y que debería haber una equivocación. Me informaron que tenía una orden de detención por estar perseguida por Ley Antiterrorista. Fue un balde de agua fría. No lo podía creer. Alegamos, dijimos que eso era un error, una mentira. Pero nada cambió. Solo nos dijeron que deberían llevarme a General Mackenna, detenida para que se aclarara mi situación. Era un día feriado y, por eso, debería esperar hasta el lunes entrante.

Recuerdo que hace años no fumaba, y recordé, inmediatamente, esa forma de acompañarse, de sentirse menos aterrada de algo, en esta vida miserable que nuevamente se presentaba. Me sentí muy tonta, porque entendí que nunca había dejado de estar presa, de ese tiempo, de ese régimen. Los últimos años por fin habían sido complacientes conmigo. Era estimada, amaba mi trabajo, la comunidad escolar de mi colegio hacía que, por fin, nos olvidaremos un poco de que vivíamos en Dictadura. Recuerdo que miré a mi pareja y le dije: "por favor, cómprame cigarros", y una vez que los traje, comencé a fumar.

No sé cuánto nos demoramos en volver a Santiago. En el asiento de atrás un detective armado y yo, me parece recordar. Adelante, Bruno manejando. Me bajaron en el Cuartel General en el barrio Estación Mapocho y no recuerdo si me interrogaron ahí. Solo sé que me encerraron en un calabozo pequeño, con una camilla y una frazada. Allí, por primera vez desde niña sentí que caía derrotada y que además no podía con mi vida sino me entregaba a un ser superior, a ese Dios que fue tierno y complaciente conmigo, en la primaria cuando estudié en las Monjas, en Puerto Montt. Fue una noche dura, terrible era el encierro, pensar en mis hijos, no saber qué se venía. Era una voz que decía ¡No, por favor, no, otra vez!

Ese día me trasladaron hacia otro lugar y me revisaron entera. Fue muy violento que me revisaran la vagina, eran mujeres dedicadas a eso. Después de eso y ya a esta fecha en donde por primera vez intenté escribir esta segunda detención, me encuentro con un pozo de desmemoria. "Me encuentro recordando otra vez estando en Cuatro Álamos, Luz Arce, Flaca Alejandra, Alejandro Espejo Gómez, y más". Confusa mi cabeza me avisa que no fue así, ni allí, pero que sí era muy cercano. Ahora era otra vez, era un dormitorio largo con muchas literas, había solo mujeres y eran presas comunes. Sí, era, después lo supe, el Centro de



Foja: 1

Detención de Mujeres que quedaba muy cerca de Cuatro Álamos, ahora, según me explicaron después, y hoy lo leo en el certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, era Tres Álamos. Allí me llevaron y estuve la larga Semana Santa, incomunicada, sin saber de mi familia, hasta que una tarde me llevaron una bolsa con comida china, y supe que era la forma de decirme que allí estaba mi compañero de vida, mandándome ese regalo, diciéndome con eso que no estaba sola, que ahora él sabía y podía llegar hasta allí.

Después, tampoco lo recuerdo: no tengo imágenes, las confundo con la primera vez, cuando me bajaron de una camioneta, 15 años antes. ¿Cuándo volví a abrazar a mis hijas y a mi pequeño Bruno de 7 años recién cumplidos? No tengo imágenes, no recuerdo nada ahora.

Esta vez el mundo me recibió. Salí pronto porque la solidaridad existe. Mi compañero, Bruno, se relaciona rápidamente con el abogado Eliseo Richards, y este, a su vez, con el abogado Alejandro Hales, y de pronto estaba libre y allí en la calle mis compañeros, los queridos profesores del colegio Francisco de Miranda, celebrando mi libertad. Creo recordar que fue así, mis compañeros de trabajo estaban ahí, los vi, en sueños no fue, pero me cuesta, me doy cuenta de que aún huyo de ese tiempo amargo y doloroso, y que una persistente desmemoria me acompaña.

Después de esta experiencia colapsé en mi trabajo de profesora. Me sobrevino una depresión que me impidió hacer clases. Salí con licencia y mantuve el año laboral de este modo. Después, decidí renunciar pues mi estado general era lamentable y no me sentía capaz de continuar este trabajo que demanda tiempo, energía y gran compromiso. El año 1990 renuncié y continué trabajando en mi hogar; me dediqué a la artesanía en cobre esmaltado, trabajo de arte que hacíamos con mi esposo Bruno y que él vendía en el centro de la ciudad, en tiendas o locales de regalos y recuerdos para el turista.

Tres años más tarde decidimos irnos a vivir al sur. Esta decisión me llenó de esperanza y comencé a mirar hacia adelante. La alegría había llegado, ya no vivíamos en dictadura, era un tiempo mejor. El sur de mi niñez, ahora estaría con Bruno y mis hijos Claudia y Bruno Renato. Decidimos irnos, volver a vivir en Valdivia, les gustó la idea y empacamos todo y llegamos al sur de mis sueños, en noviembre de 1992. Tania, de 19 años; y, Paulina, de 22 años, siguieron su vida en Santiago.



Foja: 1

Han pasado ya muchos años y mucha vida. Mirando hacia atrás me doy cuenta de lo duro que fue la vida para mis hijas e hijo. Antes no lo entendía, de algún modo pensaba que era yo la herida, la convaleciente, la víctima. Pero al pasar del tiempo, las lecturas y recuerdos de terapias, escritos, conversaciones, recuerdos de cada una de ellas y él, ahora sé que todos estamos heridos, enfermos, afectados y que nos marcó en lo que logramos y en lo que no pudimos concretar. El arte ayudó mucho, pero no fue suficiente. Nos sentimos bien escribiendo poesía, publicando y de algún modo dando vuelta la página, pero si miro a mi familia, sé que hay mucho daño; familias formadas no continuaron, soledades, carencias y faltas de recursos, escasez y de dependencia del apoyo y solidaridad familiar para seguir adelante y sobrevivir.

Profesionalmente me considero responsable y eficiente, sin embargo, me costó hacerlo. Enfrentar al grupo de curso era difícil; siempre me faltó felicidad para seguir, para hacer carrera. Aunque tengo a grandes amigas, ex alumnas mías. Reconozco esta debilidad, esta falta de coraje para disfrutarlo.

Quiero seguir ayudando, declarar por todas y todos aquellos que son buscados aún por sus familias y ya no están. Tengo miedo después de hacerlo, lloro mucho, me pregunto por qué yo no desaparecí, por qué ellos, en fin. El mes de agosto es una pesadilla cada año. Y yo puedo aportar más. Solo quisiera resarcir a mis descendientes de algo que no tuvieron porque yo no estaba allí, firme y sólida para apoyarlos, darles lo que necesitaran. Agradezco infinitamente a toda la familia. A mis suegras, ambas, maravillosas personas, siempre dispuestas a ayudar, plata, alimentos, cuidado y vestimenta de las hijas. A mi compañero y a mi ex esposo que siempre apoyó a sus hijas. A mis adorados padres, hermanas y amigos que sí estuvieron, que están siempre”.

Expresa, que los hechos sufridos por la víctima doña Heddy Olenka Navarro Harris también han causado un enorme daño, por rebote o repercusión, a sus hijas e hijo, quienes también son demandantes. Indica, que dicho daño puede ser evidenciado en los informes psicológicos, emanados de profesionales del PRAIS, del Ministerio de Salud.

Sobre los hechos que fundan este daño sufrido por repercusión por los familiares de doña Heddy Olenka Navarro Harris, las personas demandantes han expresado los siguientes relatos.



Foja: 1

Relato de doña Paulina Andrea Muñoz Navarro:

“Es difícil escribir en un solo texto y cuantificar todo el dolor y daño causado, además de explicar cuál ha sido éste, pero intentaré hacerlo.

Cerca de mis 40 años, cuando se cumplieron treinta años del golpe de Estado en Chile, vi una imagen en televisión, en ella salían presos del Estadio Nacional. Fue en ese momento cuando recordé una imagen de mi hermana y yo de niñas en un contexto similar, pues una vez fuimos a esperar a mi padre, el cual estuvo detenido en el Estadio Nacional. Recuerdo que la sensación que tuve en el momento fue la de estar profunda y absolutamente sola, desde ese entonces y hasta hoy es el sentimiento y recuerdo más grande de esa época, esto, a pesar de ser muy cercana a nuestra madre y a nuestras abuelas y abuelos. Los adultos trataban de sobrevivir junto a nosotras, pero sin poder vernos. Digo esto, ya que en la madurez y gracias a la terapia entiendo por lo que pasaban, y sin enjuiciarlos, a menudo me digo que tal vez a esa edad y en tales circunstancias yo hubiese hecho lo mismo, cuidarnos como podían, pero con sus almas y mentes en la sobrevivencia, más que en la crianza.

Luego de ese suceso en el que recordé mi infancia, así como de varias circunstancias en las que me fui envolviendo inconscientemente para sanar, me di cuenta de que yo siempre narraba la detención de mi madre absolutamente desconectada de mis emociones; repetía lo que había sucedido y siempre agregaba al final del relato, que yo estaba bien, y que no me había afectado. Era una forma de decir “no se preocupen”.

El año 2008 hice un diplomado en “Drama terapia”, soy actriz y siempre me ha interesado el tema de la sanación. En el diplomado debía relatar a mis compañeras y compañeros, entre los cuales varios eran psiquiatras y psicólogos, “el momento más traumático de mi vida”. Sin pensarlo mucho decidí y espontáneamente comencé a relatar ese momento: la detención de mi madre. Mis compañeros me dijeron que no era normal. De alguna forma es un momento que he guardado toda mi vida y, ahora, se ha empezado hablar de esto en la familia.

Recuerdo que esa noche dormimos en la cama de mis abuelos y que al otro día mi abuela me decía que mi madre dormía en la pieza de al lado, yo preguntaba mucho por ella a lo que me respondían que no la despertara, pero como yo iba a ir a esa pieza, mi abuela terminó diciéndome que había tenido que viajar de urgencia en avión a Buenos Aires, porque había una niña enferma a la que tenía



Foja: 1

que ir a ver. Justo miré por la ventana y pasó un avión, pensé que ella iba ahí y me quedé tranquila.

Luego, recuerdo cuando llegó a la casa, absolutamente flaca, según yo con los ojos marcados, y no paraba de llorar. Después comenzó a relatar lo sucedido, el lugar en el que estuvo y con quién había estado; hablaba de un abuelo con su nieto, etc. Yo solo escuchaba y siempre crecí con la sensación de que sin que nadie se sentara a decirme qué estaba sucediendo, yo sabía todo.

Con el tiempo y la ayuda de las terapias, desde hace unos 13 años me fui dando cuenta que estaba también algo más oculto, el “miedo” a todo, a la vida, a que le pasara algo a mi hija e hijo, a que mi pareja o alguno de ellos no volviera en la noche a casa, a que “algo malo va a pasar siempre”. Entendí también por qué lloraba a menudo siendo ya adulta o actuaba más como niña ante algunos hechos. Mi psicóloga me habló una vez de la “niña no vista” y me hizo mucho sentido. Me empezó a surgir la necesidad de hablar de la segunda y tercera generación, de que hijas e hijos, nietas y nietos fuimos víctimas también, tanto que hasta hice de esto el tema central de mis investigaciones y experiencias artísticas en mi quehacer profesional durante los últimos años.

A nivel físico o psicofísico, desde niña me ahogaba. Recuerdo que, en Buenos Aires, cuando nos fuimos allá el año 1974 o 1975, me llevaron a varios médicos y hospitales donde me hacían electrocardiogramas y siempre, según yo, decían que era un “soplo funcional”. Estos ahogos, aunque se pasaron con el tiempo, vuelven a veces y se me vinculan a ciertos momentos de tensión emocional o angustia.

El año 2015 me desmayé en el metro, me pegué en la cabeza y perdí la conciencia. Había comenzado con algunas crisis de pánico, me mandaron a hacer exámenes al corazón nuevamente y solo ahí pude quedarme con la tranquilidad de que no tenía nada a nivel físico, y el neurólogo que me vio me sugirió ver a un psicólogo o psicóloga. Me traté las crisis de pánico con todo lo que tenía a mi alcance, desde lo más “alternativo” a lo tradicional, siempre financiado por mí, salvo la psicoterapia de ILAS, en la que pagué una cifra simbólica por el tratamiento de un año.

A pesar de todo, me parece que soy y estoy sana. Tengo una hija e hijo sanos; también, puedo dedicarme a mi profesión (con toda la precariedad que significa ser y dedicarse al arte en este país). Pero persiste hoy, que tengo que hacer este relato o ser parte de la demanda, el sentir que no soy merecedora y también algo de culpa porque “no estoy tan mal como el resto”, tanto a nivel familiar como



Foja: 1

generacional. Creo que esto se relaciona con que uno de los daños importantes, que ahora puedo entender desde la adultez, en mi caso, fue el tener que ser y encarnar el rol de la hermana buena, la mayor, a la que le va bien, la que no tiene grandes problemas, la que no pataleó cuando niña, la que se portó bien cuando adolescente, y la que tal vez se tuvo que tragar todo, y por eso me ahogaba. También creo que es daño el miedo, y la ansiedad que a veces me vuelve a surgir, lo cual se traduce hoy en bruxismo, imagino, ya que he perdido 2 muelas, una hace una semana y tengo otra rota.

Sin embargo, el daño más presente, latente y menos elaborado desde mi perspectiva se ha dado en las relaciones familiares. No hablo con mis hermanas y la relación con mi padre tampoco es muy buena, es distante. Él estuvo preso en Chile y Argentina, vivió en el exilio por varios años, y solo lo volví a ver a los 15 años y me pareció que era un desconocido. Luego, a los 18 años me invitó a vivir con él a Londres, en el exilio, y nos llevamos muy mal. Me devolví a Chile y hoy lo veo de repente, cuando visito a mi abuela. Mi parecer, es que hoy no somos una familia muy unida afectivamente, hay daño, dolores y distancia”.

Relato de doña Tania Maípe Muñoz Navarro:

“Cuando fueron a buscar a mi mamá a la casa dijeron que íbamos a dar un paseo en el auto rojo de 4 puertas.

Tengo la noción de ir en el auto acostada en el asiento trasero, en vigilia, como cuando estás atento a lo que hacen los adultos, pero tranquila, tratando de conciliar el sueño, casi durmiendo.

Recuerdo que íbamos donde la abuela que vive a cuatro casas en dirección hacia el norte, hacia la plaza 12 de octubre, por la calle rey Alberto casi al llegar a Florencia.

Me reintegré y me senté despierta, ya totalmente despierta y asustada, con el corazón latiendo muy rápido debido a la desorientación, ya que íbamos en dirección sur, no hacia donde la abuela como yo pensaba. Íbamos en dirección sur cuando sentí un golpe en mi “cola” al arrastrarme por el asiento. Recién me estaba incorporando. En ese momento el auto giró por la calle Ruiz Valledor, y me resbalé por el asiento trasero, me golpeé en la cola, en el coxis y en el sacro. Ya estaba despierta, sintiéndome desorientada y muy ansiosa, cuando vi a un ser oscuro con un olor raro. Y no sentí la presencia de mi mamá.



Foja: 1

Luego de esto, recuerdo estar durmiendo en la cama de mis abuelos paternos. Mi madre ya no estaba”.

Relato de don Bruno Renato Serrano Navarro:

“Sé que todos hicieron lo mejor que pudieron por protegerme: mi mamá, mi viejo, mis abuelos, Dióscoro, Mamacha, Pinky y mis hermanas Tania, Paulina, Onae, incluso la señora Isabel que ayudaba en la casa, además de la gente del colegio. No sé realmente cuál fue el motivo de mi diagnóstico, menos aún desde este intento de resumen de una reflexión fragmentaria que he llevado desde que tengo memoria y que, ya en mi adultez, me ha llevado a la conclusión de que mi actual estado psiquiátrico está intensamente relacionado a mi historia infantil y la de mi familia.

Soy el menor de 4 hermanos. Creí en San Miguel, en la casa de la calle Florencia N° 1276, y lo hice en una familia herida.

Siempre supe que había temor y que, aunque tuve muchísimos momentos felices, las cosas siempre estaban rotas. Sabía además que mis viejos sufrían por diferentes cosas, por dinero y otros conflictos entre ellos. Lo supe a pesar de que trataron de ocultármelo.

Recuerdo haber pasado mucho tiempo con mi abuela Mamacha porque mis papás siempre estaban afuera o llegaban muy tarde. Recuerdo que tuvimos que escondernos y pasar la noche en el altillo. Mi papá intentaba poner unos cables de luces de pascua en la puerta para que no se notara que algo estaba mal.

En ese entonces tenía terror de dormir solo y mojaba la cama. También pasaba mucho tiempo jugando solo e inventando o leyendo historias. Toda mi familia tenía miedo. Lo evidenció en mi padre, quién solía despertar gritando porque tenía pesadillas. Lo veía en las fotos de sus amigos muertos, en las peleas a gritos en mi casa y en todas las cosas que intentaban esconder.

El miedo era evidente en mi mamá, quien pasó años enferma en esa cama eterna y siempre estaba llorando. En aquella época tenía temor de ir al colegio porque me acosaban las imágenes de mi mamá sola, pensé que se podría suicidar.

Con el tiempo me fui enterando de las cosas que mis padres ocultaban, la muerte de sus amigos y conocidos, y el peligro que corría mi familia. Esos sucesos ocurrieron cuando yo iba en cuarto básico, era mi último año en el colegio Francisco Miranda.



Foja: 1

Recuerdo ser conflictivo y pésimo estudiante. Era retraído y frecuentemente tenía ataques de rabia y llanto en el colegio. Tenía compañeras que cuidaban de mí y que me protegían de las burlas de otros compañeros. Me sentía querido, pues siempre alguien intentó cuidar de mí, ya sea profesoras, psicopedagogas, los pololos de mis hermanas y mi hermana Tania, quien hacía todo lo posible para mantenerse cerca. Mi hermana Paulina se quedó varias veces a cuidarnos a Claudia y a mí cuando nuestros padres no estaban.

La época en la que nos fuimos a vivir a Valdivia fue la mejor. Aun así, en mi adolescencia fui temeroso, iracundo y estuve muy acomplejado con mi imagen. Llegó un momento en el que dejé de tener miedo y eso me permitió viajar solo, moverme de noche, convertirme en artista y experimentar de todo, aunque esto implicó exponerme al peligro.

Actualmente, comprendo mi diagnóstico y supongo que en esos años estaba pasando por un episodio de manía. A los 23 años y, luego de una ruptura amorosa, caí en un violento estado depresivo, el cual he tenido ininterrumpidamente hasta el día de hoy, y por el cual he recibido tratamiento durante los últimos 15 años. Me costó aceptar mi diagnóstico, pues soy reticente respecto a la psiquiatría. Hoy puedo aceptarme como maníaco depresivo crónico.

La primera crisis que relaté anteriormente duró más de un año, y se expresó en sufrimiento psicológico, ideación suicida, alucinaciones y conductas autodestructivas.

Durante otros periodos de mi vida la situación volvió a manifestarse. Los peores momentos ocurrieron el año 2013, cuando me mude al extranjero para comenzar mi investigación doctoral sobre el tema autobiográfico “representaciones de la violencia en la poesía chilena de los años 80”.

El 2016 nuevamente comencé a manifestar síntomas: tenía crisis de pánico, pesadillas recurrentes y terrores nocturnos.

La última crisis que tuve fue el año 2020, cuando retorné a Chile. Estábamos en plena pandemia y gracias a los profesionales del PRAIS, así como el tratamiento otorgado, mi condición ha sido relativamente contenida. Actualmente estoy estable”.

Sostiene, que estos espantosos hechos marcaron de manera determinante la vida de las personas demandantes anteriormente individualizadas.



Foja: 1

Señala, que en razón de los sucesos relatados, que constituyen los hechos fundantes de esta pretensión, es que interpone la presente acción de indemnización de daños y perjuicios en contra del Estado de Chile, con el objeto de que se indemnice a doña Heddy Olenka Navarro Harris, víctima reconocida por la comisión Valech I; y, a doña Paulina Andrea Muñoz Navarro, a doña Tania Maipe Muñoz Navarro y a don Bruno Renato Serrano Navarro, hijas e hijo de la víctima doña Heddy Olenka Navarro Harris, por el daño por repercusión que han sufrido, y se repare, en parte siquiera, el daño que se les ha causado.

Sostiene, que los hechos señalados anteriormente son constitutivos de crímenes de lesa humanidad, según lo establecido actualmente en el artículo 7 del Estatuto de Roma, pero cuya prohibición y sanción ya constituía norma de ius cogens, a la época de los hechos perpetrados en perjuicio de doña Heddy Olenka Navarro Harris.

Detalla, que estos actos, constituyen los delitos consumados de secuestro calificado y aplicación de tormentos en perjuicio de la víctima, los que se realizaron en el contexto de ataques sistemáticos y generalizados dirigidos en contra de la población civil por parte de agentes estatales. Ante esto, y en virtud de principios del derecho internacional, afirma que es deber del Estado reparar a las víctimas de estas violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos.

Expone, que el Estado de Chile, ha suscrito y reconocido declaraciones y convenciones a nivel internacional, y adherido a múltiples resoluciones emitidas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, además, ha otorgado vigencia a determinadas normas que se fundan en la costumbre internacional y los Principios Generales del Derecho, es por esto, que ha ido adquiriendo una serie de obligaciones internacionales, que tienen como marco la obligación general de “respeto de los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Asegura, que la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos



Foja: 1

humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

Respecto a la Responsabilidad del Estado, señala que el artículo 38, inciso 2, de la Constitución Política de la República señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado, podrá reclamar ante los tribunales de justicia.

Sostiene, que la naturaleza de la responsabilidad extracontractual del Estado está contenida en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, todas ellas, normas propias del Derecho Público, excluyendo la aplicación de normas civiles, lo que ha sido establecido por la doctrina y la jurisprudencia.

Argumenta, que como ha quedado de manifiesto, la correcta resolución del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política de la República de 1980, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A contrario sensu, indica, que en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses.

Expone un conjunto de razones de texto que llevan a sostener porqué el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana. Tales razones son las siguientes:

- 1.- Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común.
- 2.- Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello, fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (Art.2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (Art.2321); edificios en ruinas (Art.2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (Art.2326 y Art. 2327). Agrega, que la regla del artículo 2322 -sobre la relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las



Foja: 1

Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. De la misma manera, aunque existe una norma que parece más pertinente a este asunto concreto –el caso de quien dispara armas de fuego de manera imprudente (Art.2329, N°1)- con todo, dicha regla también es inadecuada para resolver casos de violaciones intencionales, masivas y sistemáticas a los derechos esenciales de un sector no menor de habitantes del Estado.

Sostiene, que la acción destinada a obtener indemnización de perjuicios derivados de la comisión de delitos de lesa humanidad es imprescriptible, al igual que la acción penal.

Menciona, que si bien no existe norma expresa que lo señale en el ordenamiento jurídico, debemos reconducirnos al artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República de 1980, que es la norma constitucional de apertura hacia el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este sentido, podemos aplicar normativa internacional y jurisprudencia relativa a la imprescriptibilidad de la acción penal y civil.

Señala, que la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago ha dicho *“Que la prescripción de la acción de que se trata no puede ser determinada a partir de las normas del derecho privado, que se refieren efectivamente a cuestiones patrimoniales, pues esas normas atienden a finalidades diferentes a aquellas que emanan del derecho internacional de los derechos humanos y del ius cogens, que importan obligaciones de respeto, de garantía y de promoción de esos derechos, así como la adopción de medidas para hacerlos efectivos”* (Cfr. ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 11.05.07, Caso “Reyes Gallardo con Fisco de Chile”, rol ingreso N° 3505-2002, considerandos N° 2 y N° 3).

Comenta, que en el mismo sentido, se ha pronunciado la Excm. Corte Suprema de Justicia.

Añade, que por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana, que se encuentren reconocidos y garantizados por dicha Convención.

Señala, que si bien, es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, la ausencia de regulación jurídica



Foja: 1

expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del derecho que, en el caso concreto, orientan al derecho administrativo y en especial al derecho internacional de los derechos humanos.

Expresa, que resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano, al interior del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (del cual, el Estado de Chile es parte), trae aparejada la obligación de reparar el mal o daño que ha causado tal violación. Afirma, que en esta materia, la norma rectora es el artículo 63 del Pacto de San José de Costa Rica.

Sostiene, que en Chile –dada su calidad de Estado miembro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos–, la lógica que debiera operar en casos de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos de alguna persona, tendría que ser la misma, esto es, reparar íntegramente el mal causado. Obligación ésta del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber, el principio pro homine, entendiendo por tal la interpretación de sus preceptos en el sentido más favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros (Cfr. Nikken, P. El concepto de derechos humanos, en Estudios Básicos de Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, 1994, pp. 15-17).

Menciona, que si bien la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, no se encuentra ratificada por Chile, su obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de ius cogens. (Cfr. Excm. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 13.12.2006, “Caso Molco”, Rol ingreso N° 559-2004. Considerando N° 19).

Argumenta, que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble, constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente y de manera justa a las víctimas. Indica, que esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible.

Relata, que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su 61° Periodo de Sesiones, aprobó el año 2005 el “*Conjunto de*



Foja: 1

principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad". Allí se lee –en el Principio 23, sobre restricciones a la prescripción- que *"La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación"*.

Afirma, que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales, mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del Derecho Público y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, logrando sujetar, dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente, desde los primeros acuerdos interestatales.

Comenta, que en la sentencia del caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó directamente la cuestión de las indemnizaciones pecuniarias por delitos de lesa humanidad, en particular, respecto de ejecuciones forzadas y desapariciones ejecutadas durante la dictadura. Aquí hizo dos pronunciamientos fundamentales en esta materia. En primer lugar, señaló que si los hechos que daban origen al reclamo indemnizatorio habían sido calificados como delitos de lesa humanidad *"tales acciones [civiles] no deberían ser objeto de prescripción"*. En otras palabras, asegura que la acción civil, al igual que la penal, es imprescriptible respecto de dichos delitos. En segundo lugar, reiteró la doctrina fijada en la sentencia dictada en el caso García Lucero vs Chile, en orden a que los programas administrativos de reparación no podían obstaculizar el acceso a la reparación judicialmente establecida. Agregó que ambos tipos de indemnizaciones podían legítimamente considerarse como diferentes o complementarias, o sea, *"podría tomarse en cuenta, en una vía lo otorgado en la otra"*, pero no podría significar el cierre de la vía judicial. Esto, para permitir la determinación individual de daños o para cuestionar la suficiencia de la reparación administrativa.

En cuanto al daño, asegura, que en este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima, que a los demandantes les ha tocado soportar, a la víctima doña Heddy Olenka Navarro Harris de manera directa



Foja: 1

por el hecho criminal sufrido, y un daño por rebote o repercusión, que se ha causado a sus hijas e hijo.

Precisa, que la dolorosa situación a la que se han visto enfrentados, configura un claro daño moral que, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado, mediante la indemnización.

Expone, que se entiende por daño moral aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico.

Comenta, que respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado.

Afirma, en la actualidad, ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Excma. Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional.

Expresa, que asimismo, existe un daño de carácter transgeneracional causado especialmente a doña Paulina Andrea Muñoz Navarro, a doña Tania Maipe Muñoz Navarro y a don Bruno Renato Serrano Navarro, hijas e hijo, respectivamente, de doña Heddy Olenka Navarro Harris. Comenta que entenderemos por esta especial categoría de perjuicio como aquel daño o trauma psicosocial que se trasmite de la víctima a los hijos. Ya sea por vivir una situación represiva, o por la pérdida de un familiar. Asegura, que al ser detenida la víctima, madre de las personas demandantes, se produce un quiebre en la familia, el cual se va transmitiendo mediante diversas conductas hacia sus descendientes, generando un impacto directo en la historia familiar.

Advierte, que en psicología, se considera a la familia como “un todo”. De ahí que cualquier cambio en uno de sus miembros afecte necesariamente a todo el grupo familiar. En el caso del terrorismo de Estado, entonces, cuando la represión afecta a algún miembro de la familia, todo el núcleo familiar se encuentra afectado y transformado.

Previa invocación de jurisprudencia, disposiciones legales y doctrina que estima pertinentes, solicita tener por interpuesta demanda civil de indemnización de



Foja: 1

daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, pidiendo el pago suma total de \$650.000.000.-, esto es, \$ 200.000.000.- para doña Heddy Olenka Navarro Harris; \$150.000.000.- para doña Paulina Andrea Muñoz Navarro; \$150.000.000.- para doña Tania Maípe Muñoz Navarro; y, \$ 150.000.000.- para don Bruno Renato Serrano Navarro por concepto del daño moral, sufrido producto del accionar ilícito de agentes estatales en perjuicio de doña Heddy Olenka Navarro Harris; o la suma que el Tribunal determine prudencialmente y en Justicia, con reajustes de acuerdo con el IPC, más intereses legales, ambos desde la fecha de notificación de la demanda o desde cuando el Tribunal estime; acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al demandado a pagar a las personas demandantes civiles la suma señalada, o la que el Tribunal prudencialmente determine, más las costas del juicio.

QUINTO: Que, el demandado contestó la demanda, señalando en primer lugar, que respecto de los hijos de la demandante doña Heddy Olenka Navarro Harris, estos no fueron reconocidos por el Estado como víctimas de Prisión Política y Tortura por la referida Comisión Valech I, ni por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (conocida como Comisión Valech II). Expresa, que controvierte la totalidad de los hechos en que se funda la demanda respecto de estas demandantes, tanto en la forma en que ocurrieron, como en cuanto a su existencia, naturaleza, monto y relación de causalidad de los perjuicios cuya indemnización se reclama.

Alega la falta de legitimación activa respecto a los hijos de la víctima.

Hace presente, que consta que estos tres demandantes concurren en sus calidades de víctimas por repercusión o rebote, por torturas y prisión política de su madre, y no de ellas. Indica, que no teniendo las calidades de víctimas, carecen de legitimación activa para interponer la presente demanda.

Señala, que la madre, doña Heddy Navarro Harris, quién si es directamente víctima de prisión política y torturas, es decir, la legitimada activa para demandar, también comparece en estos autos pretendiendo una indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de la prisión política, detención y torturas que habría vivido.

Argumenta, que el daño, para ser indemnizado, debe ser personal, actual, real y cierto, lo que significa que sólo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación. Señala, que si bien el daño reflejo o por repercusión, se puede considerar un daño



Foja: 1

personal, este sólo puede ser indemnizado cuando esté dentro de ciertos límites. Expresa, que no niega que la muerte pueda generar un daño reflejo para sus familiares, no obstante, advierte, que si bien no resta gravedad a los hechos relatados en el libelo, ocurridos el 20 de octubre de 1974, no puede considerarse que se encuentre contemplado en ninguno de los dos casos que la doctrina y la jurisprudencia han planteado como causantes de daño reflejo (muerte o incapacidad).

Comenta, que si bien se ha extendido a casos en el que la víctima directa no ha fallecido, sólo se ha extendido a casos de gran invalidez.

Advierte, que extender el daño moral por repercusión a extremos tales como los descritos en esta demanda, ocurridos por lo demás hace décadas, donde la víctima directa y titular de la acción comparece en estos mismos autos demandando la indemnización que le pudiese corresponder, se genera un injusto que afecta a la legitimidad del interés protegido con la responsabilidad civil y, por ende, la acción que pretende ese daño debe ser rechazada.

En subsidio, opone la excepción de improcedencia de la indemnización demandada, por limitación de la justicia transicional.

Detalla, que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. Expresa, que sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria. Ello porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas.

Indica, que no es posible omitir el hecho que las arcas fiscales, deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad, indica, que lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos acontecidos en nuestro país.

Comenta, que no es extraño que muchos de los sistemas indemnizatorios creados en el marco de la Justicia Transicional privilegien a algunos grupos en desmedro de otros; se compensen algunos daños y se excluyan otros; o se fijen legalmente,



Foja: 1

luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas especiales de reparación.

Relata, que la Ley 19.992 ha constituido un esfuerzo trascendental de reparación, pues mediante ella se hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de prisión política y tortura mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público.

Detalla, que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737-

Precisa, que en consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Hace presente, que la ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "*Listado de prisioneros políticos y torturados*" de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años. Adicionalmente, consigna que la ley 20.874 determinó un Aporte Único de Reparación, por \$1.000.000 para cada una de las víctimas individualizadas en las nóminas Valech y de \$600.000 a favor de cada una de las viudas de dichas víctimas.

Afirma, que el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones ha sido alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la Justicia Transicional



Foja: 1

exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Señala, que para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar a la víctima de prisión política y tortura, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral, como se explicará.

Advierte, que ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el pretium doloris, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.

Expone, que en nuestro Derecho, se pueden traer a colación distintas normas, entre ellas, el artículo 43 de la Ley N°16.744, que prescribe que producida la muerte de un afiliado por accidente del trabajo o enfermedad profesional o si fallece el inválido pensionado, tendrán derecho de pensiones de supervivencia el cónyuge, hijos, madre de sus hijos naturales y los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar. Así también, las normas sucesorias de los artículos 988 y siguientes del Código Civil establecen una prelación, en que los asignatarios más directos -hijos y cónyuge- excluyen al resto.

Sostiene que siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso de autos, han sido preteridos por la ley como beneficiarios de una asignación en dinero por el daño que invocan, en beneficio de la víctima, sin que ello implique afirmar que no hayan obtenido una reparación satisfactiva por otra vía.

Concluye afirmando, que la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los parientes, siendo titulares de la acción de reparación los afectados directamente por el daño.

Sin perjuicio de lo anterior, afirma, que los demandantes hijos han obtenido igualmente otras formas de reparación satisfactiva.



Foja: 1

Expresa, que el hecho que los hijos de la demandante doña Heddy Navarro Harris, no hayan tenido derecho a un pago en dinero, -por la preterición legal- no significa que no hayan obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de éste.

Indica, que tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto puramente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido.

Comenta, que desde la perspectiva de las víctimas por repercusión, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Señala, que en este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Detalla, que estos programas incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Expresa, que la llamada Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias. Ello se desprende del concepto, que el Ejecutivo, entendió por reparación, esto es: *“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”*. De esta forma, en la discusión de la ley N° 19.123, en diversas oportunidades, se hizo referencia a la reparación “moral” buscada por el proyecto.

En este sentido, puede indicarse que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias – sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas



Foja: 1

víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Menciona, que la doctrina, en la materia, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Comenta, que en el caso de personas como las de autos, las reparaciones satisfactivas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, señaladas en detalle previamente en la presente contestación, a saber:

a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;

b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día nacional del detenido desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año, en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.

c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.

d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH, tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el "Memorial de los prisioneros de Pisagua" en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo "Para que nunca más" en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial "Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia" en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial "Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama" en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el "Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados



Foja: 1

Políticos de la región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el “Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca” en esa ciudad; y el “Memorial escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas” en el Cementerio Municipal de esa ciudad.

En suma, y como conclusión, el cúmulo de reparaciones indicadas ha producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente.

Afirma, que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables en relación con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DD.HH.

Asegura, que tanto la indemnización que se solicita en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas, pretenden compensar el mismo daño ocasionado por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo, por ello, ser exigidos nuevamente.

Cita, el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco de Chile, y comenta que este ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *“aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”*.

Advierte, que diversas sentencias ya habían insistido con anterioridad en que el propósito de estas leyes fue precisamente *“reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”*, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.



Foja: 1

Menciona, que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Señala, que en este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Indica, que en un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial. Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe para crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Advierte, que esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados. Argumenta, que es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.



Foja: 1

Concluye, haciendo presente, que estando entonces la acción interpuesta en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, es que opone la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizada los demandantes doña Paulina Andrea Muñoz Navarro, doña Tania Maípe Muñoz Navarro, y don Bruno Renato Serrano Navarro, en sus calidades de hijos de la demandante principal.

En cuanto a la demandante doña Heddy Olenka Navarro Harris, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la demandante, en tanto víctima directa reconocida por la Comisión Valech.

Expresa, que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde– lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”.

Advierte, que el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a duda, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Detalla, que estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han



Foja: 1

estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones políticas, tal como ya ha sido señalado por esta parte.

Relata, que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Comenta, que el mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, *“reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”*.

Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación indica que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación *“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”*. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en *“un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”*. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontraba también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación.



Foja: 1

Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado.

Señala, que esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Afirma, que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Asegura, que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En cuanto a las transferencias directas en dinero, advierte que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destaca, que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia.

Aclara, que ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

Reitera, que a diciembre de 2019 el Estado de Chile ha desembolsado la importante suma total de \$992.084.910.400.-

Comenta, que una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto



Foja: 1

compensatorio. Precisa, que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Expresa, que como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Asegura, que ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Sostiene, que la actora ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N° 19.992 y sus modificaciones.

En cuanto a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, comenta, que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones.

Detalla, que en este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Añade, que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.88326.- Este presupuesto se distribuye por cada Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al



Foja: 1

recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos. Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Agrega, que igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Respecto a las reparaciones simbólicas indica, que este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Argumenta, que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Señala, que estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, y al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, es que opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la demandante de la presente causa.



Foja: 1

En subsidio de las excepciones precedentes respecto de todos los actores, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida conforme a los siguientes argumentos.

En primer lugar, asegura, que las acciones indemnizatorias de familiares de víctimas de prisión política y tortura no se ejercen como causadas directamente por crímenes de lesa humanidad, por lo que son plenamente prescriptibles.

Hace presente, que quien sufrió efectivamente violaciones a los derechos humanos fue precisamente la víctima directa, esto es, doña Heddy Navarro Harris, mas no así su grupo familiar.

Indica, que del relato señalado en la demanda, se hace presente que los hijos de la víctima no fueron directamente afectadas por acciones de agentes del Estado, sino que los daños señalados serían una consecuencia de la detención y tortura sufrida por su familiar, mas no así por sí mismos.

De este modo, en tanto los aludidos demandantes hijos no son víctimas de violaciones a los derechos humanos, asegura, que no estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad, resultando aplicable la institución de la prescripción.

Opone, la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Advierte, que conforme al relato efectuado por los demandantes, la detención ilegal, prisión y tortura que sufrió la víctima Heddy Navarro Harris ocurrió el día 15 de agosto de 1974.

Expresa, que entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 2 de agosto de 2022, igualmente ha transcurrido el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente la



Foja: 1

acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de las acción civil que contesta, transcurrió el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Comenta, que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Argumenta, que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es por lo que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”*.

Hace presente, que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Señala, que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado.

Sostiene, que esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Añade, que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente.



Foja: 1

Expresa, que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Comenta, que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Destaca que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Consigna, que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido.

Expresa, que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Añade, que por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

Comenta, que el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

Hace presente, que nuestra Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Detalla, que en dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:



Foja: 1

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva.

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal.

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto.

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención de los demandantes en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Expresa, que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia.

En cuanto al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, señala, que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de estos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular, indica, que como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del



Foja: 1

Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

Advierte, que basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Respecto a las alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, expresa, que se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Indica, que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar –tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Agrega, que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

Añade, que la Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “*Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad*”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos



Foja: 1

de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

Afirma, que la Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta Convención, destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile.

Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Advierte, que el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país. Hace presente, que la Excma. Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, y en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

Argumenta, que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.



Foja: 1

En cuanto al daño e indemnización reclamada, comenta, que en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$200.000.000.- para la víctima directa doña Heddy Navarro Harris y \$150.000.000 para cada uno de los hijos.

Respecto del daño moral cuya indemnización pretenden los demandantes que comparecen a título de hijos de la víctima directa, expresa, que se debe considerar la controversia de los hechos y sus consecuencias jurídicas formuladas por el demandado, debiendo los actores acreditar las circunstancias fácticas de los daños pretendidos, así como su existencia, y el vínculo de causalidad entre éstos. Señala, que en este sentido, se debe tener presente que la prueba de la causalidad es un elemento de la responsabilidad civil que debe ser satisfecho mediante un umbral de suficiencia probatoria que permita tener por acreditada una determinada relación de causa y efecto entre el hecho por el cual se pretende indemnización -en este caso, la detención y tortura sufrida por la madre-, y los daños por el cual se pretende indemnización.

Hace presente, que el menor de los hijos demandantes no había aún nacido a la época de los hechos, como se expresa en la demanda.

Finalmente, indica, que en el eventual caso de acogerse una indemnización respecto de los hijos que demandan un daño por repercusión, éste no podría ser el mismo monto que aquél que eventualmente se fije para la víctima directa de prisión y tortura. Los perjuicios sufridos por la víctima directa, del cual dio cuenta ante la Comisión Valech, supuso importantes dolores físicos con eventuales consecuencias posteriores, el cual no puede considerarse del mismo modo que el resto de su grupo familiar, quien no sufrió directamente tales graves violaciones a sus DDHH, en tanto no sufrieron ni prisión ni torturas.

Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que este consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Comenta, que ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.



Foja: 1

Expone, que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Añade, que es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización en un procedimiento destinado para atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, advierte, que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Señala, que las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las excepciones precedentes, expresa, que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Detalla, que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el Tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por los actores a través de los años de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Comenta, que de no accederse a esta petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.



Foja: 1

Añade, que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Además de lo alegado, sostiene que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Advierte, que a la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene el demandado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Señala, que lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Indica, que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, afirma, que en el hipotético caso de que el Tribunal decida acoger la acción de autos y condene al demandado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Prevía invocación de jurisprudencia y disposiciones legales que estima pertinentes, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente los montos indemnizatorios pretendidos.



Foja: 1

SEXTO: Que, evacuando la réplica, respecto a la alegación que hace el demandado consistente en aplicar el modo de extinguir las obligaciones “excepción de pago” o, cómo expresa eufemísticamente, de “reparación satisfactiva o integral”, comenta, que le parece errado. Argumenta, que los montos que otorgan las referidas leyes sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Afirma, que en ningún caso dichas pensiones reparan íntegramente el dolor experimentado por los demandantes en sus calidades de víctimas directas e indirectas de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales.

Hace presente, que nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que debería obtener, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible. Conforme con ello, indica, que es evidente que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada. Con todo, expresa que parece bastante razonable que el Fisco reconozca por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a las víctimas que aquí representa. Por lo demás “los pagos” que realiza el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que más tarde alega.

Señala, que la Ley N° 19.123, que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2 establece que *“Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”*. Advierte, que la palabra promover no es sinónimo de reparar, y en el caso de la demandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece hasta el día de hoy, por las brutales torturas proferidas por agentes del Estado. El sentimiento de injusticia y de no haber sido compensados, ni reparados, subsiste intacto e irreductible hasta el día de hoy.

Destaca, que la propia Ley 19.123 no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24 (“La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiese corresponder al respectivo beneficiario”), entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber mediado el pago de una pensión como ocurre en este caso concreto. En otras palabras, al no establecer la ley en comento incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión de reparación



Foja: 1

y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, de suyo insostenible deviene la excepción de reparación integral invocada por el Fisco de Chile.

Advierte, que el artículo 76 de La Constitución Política de La República, establece que: *“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”*. En virtud de este artículo, el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la Carta Fundamental, ya que basarse en la Ley N° 19.123, y muy especialmente en la Ley N° 19.992 y sus modificaciones, para decir que el daño moral ya está reparado llevaría necesariamente a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello es abiertamente inconstitucional.

Señala, que si se aceptara la tesis Fiscal, el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, es decir el Estado de Chile, y le estaría vedado a las víctimas discutirlo.

Respecto a la excepción de prescripción extintiva, comenta, que le parece jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil.

Expresa, que tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos, por cierto, a la Excelentísima Corte Suprema.

Afirma, que el demandado incurre en un error jurídico al sostener que este litigio se debe resolver haciendo uso de categorías propias del derecho privado. Comenta, que debe tenerse presente que la argumentación invocada por la defensa fiscal resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la “inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado” basado en que “el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil



Foja: 1

en el Título XXXV, denominado De los Delitos y Cuasidelitos, artículos 2314 y siguientes”. Esta última alegación, resulta incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla. Igualmente, dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo ha requerido de esos mismos tribunales y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone, como es el caso sublite.

Reitera, que el demandado en su contestación de la demanda insiste que el caso de autos estaría prescrito. Sostiene, que tal hecho no es así por varias razones:

-La acción constitucional, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del estado no establece plazo de prescripción. (Artículo 38º inciso 2º de la Constitución Política de la República).

-El demandado no (re) conoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues insiste en sostener una interpretación antojadiza y/o reduccionista no solo de las leyes que componen el ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional de los Derechos Humanos, como se verá más adelante.

Argumenta, que el sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas.

Sostiene, que la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla, verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento. Destaca, que la evidente naturaleza sancionatoria del instituto de la prescripción extintiva impide que esta sea aplicada por analogía, con mayor razón cuando su aplicación analógica se contrapone a los principios que informan tanto el Derecho Público en general y el Administrativo en



Foja: 1

particular, así como - y muy especialmente - los que subyacen en el Derecho Internacional de los Derechos humanos.

Afirma, que la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular: mientras el Código Civil regula relaciones de tipo contractual vinculada a un negocio común o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí nos encontramos frente a delitos de la mayor gravedad que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto. Así, al no existir una similitud en las situaciones fácticas no resulta viable la analogía que supone hechos de igual valor que implique iguales consecuencias jurídicas.

Sostiene, que en un Estado de Derecho real - y no aparente – el principio de la responsabilidad es de la esencia del mismo. Los daños causados por el Estado literalmente “se pagan”.

Hace presente, que el derecho citado por las partes no es vinculante para el jurisdiscente.

Respecto de la afirmación que realiza el demandado en relación a que la Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, señala, que si bien ello es cierto, la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos concediendo así la correspondiente indemnización.

En relación al monto de lo demandado, indica, que en la demanda se ha señalado un monto, pues una demanda indemnizatoria exige pretensiones concretas.

Hace presente, que no hay dinero que supla el dolor experimentado por sus mandantes. Agrega, que si al Tribunal le parece excesivo lo pedido, señalaron que se condene a la suma que el Tribunal disponga.

Previa invocación de disposiciones legales y jurisprudencia que estima pertinente, solicita tener por evacuado el trámite de réplica, y de traslado al de dúplica.



Foja: 1

SEPTIMO: Que, evacuando la dúplica, señala que los demandantes hijos de doña Heddy Olenka Navarro Harris, víctima reconocida en Informe Valech, no han sido reconocidos por las comisiones Valech I ni II como víctimas de prisión política y torturas. Sostiene, que en consecuencia, deben acreditar la totalidad de los presupuestos de su demanda.

Indica, que no es efectivo que el daño no requiera ser probado en juicio, como lo señalan los actores.

Afirma que no es posible inferirlo, más aún, cuando los demandantes no detentan la calidad de víctimas de prisión política y torturas.

Señala, que en su réplica, los demandantes no realizan defensa alguna respecto a la falta de legitimación activa alegada respecto de los demandantes que accionan, en sus calidades de hijos del primer demandante. Afirma, que es la víctima directa quien tiene la titularidad de la acción por los hechos que personalmente sufrió, sin que la presente acción se extienda a favor de terceros que no fueron víctimas de prisión política y torturas.

Reitera, que el daño, para ser indemnizado debe ser personal, actual, real y cierto, lo que significa que sólo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación. Si bien el daño reflejo o por repercusión, se puede considerar un daño personal, este sólo puede ser indemnizado cuando esté dentro de ciertos límites, y expresa, que la acción de autos queda fuera de ellos, pues extender el daño moral por repercusión a extremos tales como los descritos en esta demanda, ocurridos por lo demás hace décadas, genera un injusto que afecta a la legitimidad del interés protegido con la responsabilidad civil.

Asegura, que se determinó una indemnización legal que optó por beneficiar a la víctima de prisión política y tortura, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral. Menciona, que ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el pretium doloris, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto, todo ello, sin perjuicio de las reparaciones simbólicas detalladas que los benefician.



Foja: 1

Luego, solo en relación con la demandante reconocida como víctima de prisión política y tortura por la Comisión Valech, alega la excepción de reparación satisfactiva, por cuanto el daño moral cuya indemnización demanda en estos autos ya habría sido indemnizado. Insiste, respecto al marco general de las reparaciones ya otorgadas, al esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por el demandante, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

Finalmente, en relación con la excepción de prescripción, agrega, que en tanto los demandantes hijos no son víctimas de violaciones a los derechos humanos, no estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad, resultando incuestionablemente aplicable la institución de la prescripción.

Además, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico Eduardo González Galeno”. Expone, que en dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Sostiene, que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. La aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

Indica, que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia.

Previo invocación de jurisprudencia que estima pertinente, solicita tener por evacuada la dúplica, y en su mérito, rechazar la demanda de autos.



Foja: 1

OCTAVO: Que para acreditar sus dichos, la demandante acompañó en autos:

Prueba Documental:

Al folio 1:

1. Certificado de nacimiento de doña Heddy Olenka Navarro Harris, emanado del Servicio de Registro Civil e Identificación.
2. Certificado de nacimiento de doña Paulina Andrea Muñoz Navarro, emanado del Servicio de Registro Civil e Identificación.
3. Certificado de nacimiento de doña Tania Maipe Muñoz Navarro, emanado del Servicio de Registro Civil e Identificación.
4. Certificado de nacimiento de don Bruno Renato Serrano Navarro, emanado del Servicio de Registro Civil e Identificación.
5. Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de 02 de agosto de 2021, además de la nómina adjunta a dicho certificado.
6. Copia fidedigna de los antecedentes que tuvo a la vista Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, para reconocer a la demandante doña Heddy Olenka Navarro Harris como víctima de prisión política y tortura del Estado, durante la dictadura cívico-militar.
7. Copia del informe psicológico de evaluación de daños asociado a violencia política en dictadura realizado a la demandante doña Tania Maipe Muñoz Navarro, emanado del PRAIS, del Ministerio de Salud.
8. Copia del informe psicológico de evaluación de daños asociado a violencia política en dictadura realizado al demandante don Bruno Renato Serrano Navarro, emanado del PRAIS, del Ministerio de Salud.
9. Copia del informe psicológico de evaluación de daños asociado a violencia política en dictadura realizado a la demandante doña Paulina Muñoz Navarro, emanado del PRAIS, del Ministerio de Salud.
10. Copia del informe psicológico de evaluación de daños asociado a violencia política en dictadura realizado a la demandante doña Heddy Navarro Harris, emanado del PRAIS, del Ministerio de Salud.

Al folio 28:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXZRHERHCXT

Foja: 1

1. Declaración jurada de doña Verónica Amanda Ubilla Navarro de fecha 03 de febrero de 2023, suscrita ante la Notaria Pública Titular de la Séptima Notaría de Santiago, María Soledad Santos Muñoz.

2. Excma. Corte Suprema. Causa Rol 18.179-2019. Sentencia de casación de 06 de diciembre de 2019, caratulado "Torres con Fisco".

3. Excma. Corte Suprema. Causa Rol 18.179-2019. Sentencia de reemplazo de 06 de diciembre de 2019, caratulado "Torres con Fisco".

4. Excma. Corte Suprema. Causa Rol 13.877-2019. Sentencia de casación de 24 de diciembre de 2021, por el homicidio de don Augusto Cepeda Venegas.

5. Excma. Corte Suprema. Causa Rol 13.877-2019. Sentencia de reemplazo de 24 de diciembre de 2021, por el homicidio de don Augusto Cepeda Venegas.

6. Copia de la Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol de ingreso N° 8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018.

7. Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada con fecha 29 de noviembre de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Órdenes Guerra y otros vs. Chile".

8. Respuesta del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentada en el caso "Órdenes Guerra y otros vs Chile" en el mes de febrero de 2018.

Además, solicitó oficios, los que fueron acompañados a los folios 24, 25 y 37.

Prueba Testimonial.

A folio 30, rindió prueba de dos testigos:

En primer lugar comparece doña Guillermina Alicia Gariazzo Gavilán, quien expone que efectivamente fueron agentes del estado quienes actuaron en contra de doña Heddy Navarro. Detalla, que después del 11 de septiembre de 1973 fue detenida doña Heddy Navarro y estando embarazada estuvo un periodo en la cárcel de la calle Londres.

Indica, que los hechos los conoce por dichos de la demandante.

Comenta, que los perjuicios psicológicos son invaluable. Menciona, que la demandante no pudo trabajar durante el periodo del encarcelamiento y tampoco



Foja: 1

posteriormente por el hecho de haber quedado fichada frente al gobierno de Pinochet. Agrega, que tuvo que salir de Chile para continuar con su vida y la de su familia.

Menciona, que doña Heddy Navarro le ha contado que permanentemente siente que la siguen en la calle, duerme mal, y tiene pesadillas por lo que vivió.

Comenta que doña Heddy, vive triste, se siente impotente y perdió su autoconfianza.

Respecto a las consecuencias familiares, expresa que la demandante le ha contado, que sus hijas fueron más débiles y temerosas después de! encarcelamiento y de los consiguientes efectos que tuvo en ellas la imprescindible salida del país.

Advierte, que ignora si los perjuicios persisten o duran hasta el día de hoy.

En segundo lugar, la testigo Raquel Catalina Salinas Álvarez expone que de los relatos que le hizo Heddy se enteró de que había sido detenida y que había sufrido vejaciones y una situación muy dolorosa, y eso la tenía en una actitud muy deprimida y sin saber cómo enfrentar la situación de sobrevivencia. Detalla, que ella tenía dos hijas, estaba separada y su situación era dramática. Eso por efecto de las detenciones de las que había sido víctima.

Respecto a la detención, comenta, que buscaban a su ex marido y le preguntaban si en su casa se hacían reuniones y cosas de ese tipo, que para la época estaban prohibidas. A ella le impactaba que la había detenido una mujer, que ella conocía, y que también había participado un tipo de apellido Romo, de quien se enteró después que le decían el guatón Romo.

Comenta, que cree que los efectos que tuvieron estas acciones son de carácter emocional y que afectaron a su conducta y provocaron un cambio en ella. Precisa, que la persona que conoció en la Universidad no tenía nada que ver con quien conoció después. Afirma, que había efectivamente un daño muy grave en su vida y que había afectado su conducta, lo que se expresaba en una actitud permanente muy negativa respecto de su futuro, de su presente y no saber cómo enfrentar lo que venía, lo que iba a ser de su vida, teniendo además hijos chicos era una situación compleja y grave.

Relata que cuando trabajó junto a doña Heddy, se percató que en ocasiones se le veía muy triste o interrumpía su trabajo por problemas de ánimo, de muchos



Foja: 1

llantos y una actitud de desesperanza. Aclara, que a pesar de que tenía excelente contacto con los alumnos y era excelente profesora, su estado no le permitía desarrollar en plenitud y capacidades. Agrega, que era claro que sufría depresión y debía tener permisos médicos de manera constante.

Comenta, que cree que los perjuicios se mantienen hasta hoy, lo que se desprende de su poesía y de la necesidad de aislarse en general. Detalla, que se fue de Santiago al sur y perdieron contacto.

Afirma, que doña Heddy, “quedó pegada” en esa época y no ha podido resolver bien el tiempo que vivió esas malas experiencias.

NOVENO: Que, la parte demandada no acompañó prueba alguna.

No obstante, se ordenó como medida para mejor resolver, oficiar al Instituto de Previsión Social, el que fue acompañado al anexo de folio 45.

DÉCIMO: Que, el caso de autos, versa sobre la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por la detención y tortura de doña Heddy Olenka Navarro Harris.

Que, de los documentos individualizados como “Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de 02 de agosto de 2021”; “Copia fidedigna de los antecedentes que tuvo a la vista Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura”; “Copia del informe psicológico emanado del PRAIS”; y del oficio acompañado al anexo de folio 45, permiten tener por acreditado que doña Heddy Olenka Navarro Harris, fue declarada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por la Comisión Valech I.

Además, caber señalar que la parte demandada no ha controvertido estas circunstancias, sino que ha centrado la controversia otros aspectos.

En cuanto a la falta de legitimidad activa:

UNDÉCIMO: Que, considerando la interposición de la excepción que niega la calidad de víctima respecto de los demandantes Paulina Andrea Muñoz Navarro, Tania Maípe Muñoz Navarro, y Bruno Renato Serrano Navarro, lo que en el fondo implica alegar de falta de legitimidad activa de estos; corresponde resolver primero aquella.



Foja: 1

Que, corresponde tener presente que los actores señalan como fundamento de su pretensión indemnizatoria el daño reflejo o por repercusión sufridos por ellos por hechos que afectaron a la madre, doña Heddy Olenka Navarro Harris, la que fue víctima de detención y tortura, lo cual habría afectado a todo su núcleo familiar; siendo por lo tanto, lo que alegan dichos demandantes, perjuicios propios y no el de la víctima inmediata.

Por otro lado, la demandada fundamenta su excepción en el hecho de que los demandantes referidos no se encuentran incluidos en la Nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe VALECH), sin embargo, cabe señalar que los demandantes no indican lo contrario en su libelo.

Respecto a la excepción de falta de legitimidad, lo primero que habrá de decirse es que la acción, en el orden de los principios, es un derecho subjetivo autónomo dirigido a obtener una determinada resolución jurisdiccional, favorable a la petición del reclamante; de ahí que para que el actor triunfe en su demanda se requiere, primero, derecho, o sea, una norma de la ley que garantice al actor el bien que pretende; segundo, calidad, o sea, la identidad de la persona del actor con la persona favorecida por la ley y de la persona obligada con la del demandado; y tercero, interés de conseguir el bien mediante la intervención del órgano público.

Por consiguiente, corresponde al juez determinar en la sentencia si la situación concreta que la demanda plantea está amparada por una norma legal, sea en forma expresa o implícita, determinar si existe una norma abstracta que contemple la situación jurídica de que se trata, si el hecho que el actor invoca corresponde a la categoría de los que esa norma considera y si la existencia del hecho está justificada. La calidad de la acción dice relación con que ésta debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada, es decir, las partes en la relación jurídica sustancial.

Ahora bien, la demostración de la existencia de la calidad invocada, que es activa cuando se refiere al actor y pasiva cuando se refiere al demandado, corresponde al actor, debiendo éste acreditar las condiciones de su acción, ya que a él incumbe demostrar su calidad de titular del derecho y la calidad de obligado del demandado.

La falta de esa calidad, sea porque no existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y



Foja: 1

aquella contra la cual se dirige, determina la procedencia de la defensa por falta de legitimidad.

Por consiguiente, la legitimación de la calidad de obrar no es un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia. Si de los antecedentes no resulta legitimación activa o pasiva, la sentencia rechazará la demanda, no porque ésta haya sido mal deducida, sino porque la acción no corresponde al actor o contra el demandado.

Finalmente, no puede tampoco olvidarse que para intentar una acción, así como para contradecirla, es necesario tener interés, porque sólo con esa condición se pone en juego la actividad jurisdiccional. Eso no impide que en ciertos casos se permita el ejercicio de la acción, aun cuando aparentemente no se descubra un interés inmediato; en efecto, el interés consiste únicamente en que, sin la intervención del órgano público, el actor sufriría un perjuicio. Por consiguiente, la cuestión de saber si media o no un interés justificado constituye una situación de hecho, debiendo el juez ampararlo (sentencia Excma. Corte Suprema, causa rol 5.242-2003).

DUODÉCIMO: Que, asentados los referidos principios doctrinarios, es de urgencia determinar si la acción de indemnización de perjuicios, consistente en el daño por repercusión, fue entablada por quien tenía derecho a ella y, en esa interrogante, cabe señalar que del libelo de los demandantes Paulina Andrea Muñoz Navarro, Tania Maípe Muñoz Navarro y Bruno Renato Serrano Navarro, se desprende que este hace consistir el daño por repercusión en el daño moral que le causó conocer y sufrir las consecuencias de la detención ilegal y torturas a que fue sometida la madre.

En ese escenario fáctico, resulta claro que se trata, esencialmente, de los sufrimientos afectivos provenientes de la experimentación de las consecuencias de los padecimientos sufridos por una persona especialmente cercana y, por eso, la concesión de una compensación por estos daños reflejos suele proceder únicamente cuando los sufrimientos morales de la víctima por repercusión alcanzan una gravedad excepcional que supere la simple pena de ver sufrir a un ser querido.

En este punto, el profesor Barros Bourie sostiene que *“superado el problema de su procedencia, los daños puramente afectivos plantean la cuestión de determinar los titulares de la acción: la lesión corporal de una persona puede producir aflicción en un amplio espectro de familiares y amigos. Aunque no existen reglas*



Foja: 1

uniformes, la tendencia comparada es más bien a restringir el ámbito de los titulares de esta acción al círculo más cercano de la víctima, que sufren cotidianamente los padecimientos del ser querido y que, a la vez, contribuyen a su superación; aunque es una cuestión de hecho que debe probarse” (Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Enrique Barros Bourie, Editorial Jurídica de Chile, pag. 353)

Así las cosas, teniendo en consideración los hechos establecidos en el Considerando décimo, resulta que los demandantes referidos se encuentran legitimados para interponer la acción de indemnización de perjuicios por el daño por repercusión alegado, toda vez que, de los certificados de nacimientos acompañados al anexo de folio 1, se desprende que los demandantes señalados son hijos de doña Heddy Olenka Navarro Harris, quien fue reconocida por el Estado de Chile como víctima de privación de libertad y torturas por razones políticas, en el informe de la Comisión Valech.

Cabe destacar, que dichos instrumentos son públicos, por lo que en conformidad a los artículos 1700 y 1706 del Código Civil, acredita que los demandantes se encuentren habilitados para interponer la presente acción. En efecto, los certificados emanados del Registro Civil, resulta idónea para establecer los vínculos de parentesco, tal como lo expresa el profesor Enrique Barros Bourie, quien abordando este tema indica que nada impide que los herederos ejerzan las acciones iure proprio por los daños reflejos. (Tratado de Responsabilidad Extracontractual Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, páginas 945 y 946). (Corte suprema, 69831-2020)

Por estas consideraciones, no cabe sino rechazar la excepción en comento.

En cuanto al fondo:

DÉCIMO TERCERO: Que, el caso de autos, versa sobre la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por las detención de doña Heddy Olenka Navarro Harris, la que ya SE tuvo por acreditada en el considerando décimo de este fallo.

Cabe reiterar, que la parte demandada no ha controvertido estas circunstancias.

DÉCIMO CUARTO: Que, de los párrafos reseñados en el considerando décimo y duodécimo, podemos concluir que estos hechos fueron cometidos por agentes del Estado, específicamente por órganos de seguridad del Estado de Chile, tal como da cuenta el informe señalado.



Foja: 1

Asimismo, se tendrá presente que este punto, la responsabilidad del Estado, no ha sido discutida por las partes de este juicio, es más, la demandada alega expresamente que los demandantes, han sido reparados satisfactoriamente por el Estado por los delitos cometidos en contra del hermano durante la época de la dictadura.

En consecuencia, se tendrá por acreditado que las detenciones y torturas de doña Heddy Navarro, ocurrieron en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar -ya sea física y/o psicológicamente- a personas opositoras al régimen militar, como en el caso de marras.

Así lo expuesto, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto a que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada.

DÉCIMO QUINTO: Que, respecto a la excepción de improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas por los hijos, indicando fundamentalmente que la indemnización no puede alcanzar a los demandantes Paulina Andrea Muñoz Navarro, Tania Maípe Muñoz Navarro y Bruno Renato Serrano Navarro, en calidad de hijos de la víctima, en consideración que se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar a la víctima de prisión política y tortura, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas; a juicio de esta



Foja: 1

sentenciadora resultan inconsistentes los fundamentos de esa parte, toda vez que no existe norma alguna que excluya a los hijos, del derecho a obtener algún tipo de indemnización en sede judicial.

No es efectivo que nuestra legislación excluya la reparación a los parientes de las víctimas.

Cabe señalar, que cuando nuestro legislador ha querido establecer una prelación lo ha hecho expresamente, como por ejemplo en materia penal, o en materia de derecho sucesorio, o en la Ley N° 16.744. Todo lo anterior, no ocurre en el caso de la indemnización de perjuicios por daño moral, menos aún en aquellas causas que se sustentan en crímenes de lesa humanidad.

A mayor abundamiento, la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores tampoco ha hecho tal distinción, es así que un fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, en esta misma materia, confirmó la indemnización de perjuicios, por el secuestro calificado de la hermana de los actores de aquella causa, cometidos por agentes del Estado (Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, Rol. Criminal N°: 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014, considerando Décimo Sexto). En este mismo sentido, el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de segunda instancia, restableciendo la indemnización de perjuicios a favor de la querellante, quien era pariente por consanguinidad en cuarto grado en la línea colateral, es decir “primo” (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, conocido como “Nilda Peña Solari”, parte resolutive).

Cabe citar también, un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, aún más reciente, de fecha 19 de octubre de 2016, dictada por la Duodécima Sala, que en lo pertinente señala:

“CUARTO: Que, lo anterior significa que el daño moral ocasionado al hermano de la víctima no admite una negativa de entrada en virtud de eventuales omisiones que el legislador habría efectuado y que le afectarían, atendida una cierta lejanía que llevaría implícita la opción ejercida por éste en las leyes antes citadas. Se trata del daño moral causado por la muerte violenta generada por agentes del Estado en una persona con la cual existía un vínculo fraterno, esto es, con quien lo ligaba un parentesco de sangre por ser hijos de los mismos padres y con quien normalmente se creció, esto es, que fue gravitante en la propia formación de la personalidad del hermano sobreviviente.



Foja: 1

Así las cosas, acreditado el vínculo, no se puede soslayar lo que aquello significa en términos de lo que ocurre con frecuencia y de allí surge la presunción que es posible construir a partir de dicho dato, con los caracteres de gravedad, precisión y concordancia que corresponde al proceso intelectual de valoración de la prueba, en términos tales que del certificado de nacimiento respectivo es posible acreditar el hecho base, del que es posible inferir la conclusión de que la forzada y violenta muerte de un hermano provoca un natural dolor, menoscabo, afectación, alteración de las condiciones normales de vida de quien tenía un vínculo fraterno que lo ligaba con la víctima. Y que no existe prueba que permita establecer que ocurrió algún suceso que hizo que los dos hermanos se hubiesen distanciado o hubiesen generado algún sentimiento de odiosidad, que tornara en irracional la conclusión que aquí se ha establecido.”

Esta sentencia, cita un fallo de la Corte Suprema que resulta del todo pertinente citar también, a saber causa Rol N° 6686-2016 de fecha 21 de julio del corriente, la que en lo pertinente señala:

“SEXTO: Que, de acuerdo a lo expuesto procede acoger el recurso en cuanto ataca la preterición legal de los actores –hermanos y tía de la víctima, adoptada sobre la base de una supuesta decisión del legislador que habría privilegiado el resarcimiento los familiares más próximos al afectado, ya que cada vez que se ha optado por establecer un orden legal respecto de beneficios o posibilidades de accionar existen disposiciones expresas que así lo resuelven, lo que en la especie no sucede, pues la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta con alegar su concurrencia y la relación con la víctima para plantear la pretensión, lo que en este caso está satisfecho”.

Que, en atención a lo expuesto precedentemente y tal como se declarará en la parte resolutive de este fallo, se rechazará la alegación hecha por la demandada en cuanto a declarar la improcedencia de las indemnizaciones dinerarias de los demandantes en sus calidades de hijos de doña Heddy Navarro.

DÉCIMO SEXTO: Que, la parte demandada opuso también la excepción de existencia de reparación satisfactiva obtenida por los demandantes. Al respecto cabe tener presente que la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios, a través de los cuales el Estado chileno ha



Foja: 1

intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere haber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

Asimismo, la citada ley en parte alguna estableció una incompatibilidad entre los beneficios que otorga e indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, no existiendo motivo alguno ni siendo facultad de esta sentenciadora para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y N° 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral.

Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema en diversos fallos, indicando incluso que las fuentes que dan origen a la indemnización por daño moral y los beneficios establecidos por la Ley N° 19.123 provienen de fuentes distintas. Es así, que la indemnización encuentra su fuente en el derecho internacional por la demanda que se hace al Estado en la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos así como la interpretación de las disposiciones de derecho internacional que conforman el *ius cogens* que tiene plena aplicación en virtud del artículo 5° de la Constitución Política del Estado, a diferencia de la norma legal interna citada. Indica que el espíritu de la Ley N° 19.123 al establecer beneficios relacionados con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no pueden confundirse con aquellas que emanan del Derecho Internacional que imponen la obligación de reparación íntegra. Refiere que la citada ley no establece la incompatibilidad



Foja: 1

reclamada por el Fisco, como tampoco importa una renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia. Por último agrega que los beneficios establecidos en el cuerpo legal no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral sufrido por las víctimas (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 1424-2013, “Episodio Tejas Verdes”, considerando décimo tercero).

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a fin de zanjar la discusión anterior, el hecho que los demandantes sean beneficiarios de un sistema de previsión de salud especial, de gestos simbólicos u otras medidas análogas, no es en caso alguno incompatible con la obtención de indemnizaciones pecuniarias por los graves hechos cometidos de los cuales han sido víctimas directa o indirectamente.

Cabe hacer presente además, y como es de público conocimiento, que muchos de los “gestos simbólicos” como señala la demandada en su escrito de contestación han sido realizados, organizados y financiados por particulares y organizaciones no gubernamentales, en los cuales el Estado ha participado de manera tangencial o derechamente no lo ha hecho.

Es por lo anteriormente expuesto que se rechazara la excepción alegada de reparación satisfactiva y reparación integral, ya obtenidas por los demandantes.

DÉCIMO OCTAVO: Que, respecto a las alegaciones efectuadas por la parte demandada en cuanto a que la acción civil se encontraría prescrita, ya sea porque los hechos ocurrieron el 15 de agosto de 1974, o por la fecha de retorno a la democracia, por lo que han transcurrido con creces los plazos para ejercer la acción civil; se deben tener presente una serie de elementos facticos y jurídicos.

En primer lugar, y como ya se ha señalado reiteradamente en esta sentencia, nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establecen los respectivos convenios e instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, toda vez que estos hechos ocurrieron en un contexto de excepción, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o con simples fines de amedrentamiento de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

Considerando la conclusión del párrafo precedente, corresponde determinar si estos son prescriptibles o no, teniendo presente que partiremos enfocándonos en la acción penal. Así, uno de los elementos más característicos de los crímenes de



Foja: 1

lesa humanidad es justamente su imprescriptibilidad, pues así se establece, por ejemplo, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 26 de noviembre de 1968, específicamente en su artículo I letra b), el que señala que *“Los crímenes siguientes son imprescriptibles, (...) b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz...”* y en el artículo 3° del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda de 1994. Si bien la Convención no se encuentra ratificada por nuestro país, las normas y especialmente los principios contenidos en el instrumento internacional, sin lugar a dudas se elevan a la categoría de ius cogens, la que sí tiene plena aplicación en nuestro derecho interno. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema en fallos recientes, como son en causa Rol N° 1424-2013, denominado “Episodio Tejas Verdes” de fecha uno de abril de 2014, en sus considerandos sexto al décimo quinto; la causa Rol N° 4300-2014, denominado “Episodio Nilda Peña Solari” de fecha cuatro de septiembre de 2014, en sus considerandos octavo al décimo tercero; y la causa Rol N° 21.177-2014, denominado “Episodio Villa Grimaldi”, caratulados “Ramón Martínez González”, de fecha diez de noviembre de 2014, en sus considerandos décimo cuarto al décimo octavo, solo por citar algunos.

En consecuencia, habiéndose determinado que la acción penal en materia de crímenes de lesa humanidad resulta imprescriptible, es necesario establecer si en el caso de marras la acción civil que deriva de estos hechos punibles también resulta imprescriptibles o si por el contrario debe aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil.

Es así, que teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que la presente acción indemnizatoria, si esté sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito. Así lo ha resuelto la Corte Suprema, en reiterados fallos, como por ejemplo en la sentencia de reemplazo en causa Rol. N° 4300-2014, de



Foja: 1

fecha cuatro de septiembre de 2014, denominado “Episodio Nilda Peña Solari” (considerando Segundo), de igual forma en causa Rol. N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, denominado como “Episodio Tejas Verdes” (considerando Undécimo, segundo párrafo), en la cual se establece claramente que la acción civil es imprescriptible. A mayor abundamiento señala el citado fallo:

“... Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama...”

Misma conclusión ha llegado la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo en sentencia causa Rol. N° 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014 (considerando Décimo Cuarto), la que señala en lo relativo a la acción civil que al igual que la acción penal, ésta

“... es imprescriptible porque se sustenta en una conducta ilícita de agentes del Estado... calificándose el delito de lesa humanidad”.

Debe tenerse presente además, que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el ius cogens, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, por cuanto ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

Cabe señalar también, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad*



Foja: 1

protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar, como pretende la demandada, que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, aserto que importaría desdeñar preceptos constitucionales.

Es así, que los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, si bien también se aplican a favor del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, no resultan aplicables en esta materia, por ser abiertamente contrarias a las normas internacionales de Derechos Humanos ya mencionadas, que establecen un carácter unitario de las acciones penales y civiles emanados de delitos de lesa humanidad.

Que, la acción resarcitoria que nace de la comisión de delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como la acción para exigir del Estado la investigación y sanción de dichos delitos; de modo que siendo el hecho generador del daño que se invoca, violaciones de derechos humanos, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto.

Así las cosas, esta sentenciadora y teniendo presente las normas ya referidas y por los fundamentos antes expuestos, rechazará tanto la alegación principal como la subsidiaria en cuanto a declarar cualquiera de las prescripciones de la acción civil que da origen a estos autos, respecto de todos los demandantes, declarando expresamente para los efectos de la presente sentencia, que la acción civil emanada de un acción penal de tipo imprescriptible por crímenes de lesa humanidad, también es imprescriptible.

Que en nada afecta lo resuelto, la defensa del demandado, respecto a los hijos de la víctima directa, toda vez que los hechos que fundamentan la pretensión de estos, se basan en violaciones a los derechos humanos.



Foja: 1

DÉCIMO NOVENO: Que, entrando al fondo de la acción deducida, y teniendo responsabilidad civil el Estado, según se explicó en los considerandos precedentes de esta sentencia, habiéndose además declarado la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N° 19.123 y N° 19.980 y las reparaciones simbólicas, en el caso que el demandante fuera beneficiario de ellas, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad, corresponde analizar la procedencia de indemnizar a los demandantes, por el daño moral con ocasión de las detenciones y torturas de doña Heddy Olenka Navarro Harris, cometido por agentes del Estado, y en la afirmativa, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose de paso a las excepciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por el actor, opuesta por la demandada.

Debe tenerse presente que el daño moral, es definido como el detrimento, angustia, dolor sufrimiento, aflicción o menoscabo o trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos, que puede afectar a la víctima o a un tercero, pudiendo consistir en daño moral puro o bien de índole pecuniario cuando indirectamente afecta la capacidad productiva del perjudicado.

Así también, en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

VIGÉSIMO: Que, en prueba de sus alegaciones, los demandantes acompañaron a los autos al anexo de folio 1, sin objeción de contrario, informe psicológico respecto de la demandante Heddy Olenka Navarro Harris, suscrito por la profesional del programa PRAIS del Servicio de Salud Valdivia, doña Alejandra Henríquez Prieto, Psicóloga. En dicho documento, en el atestado de conclusiones, se señala que doña Heddy presenta indicadores de daño asociados a una traumatización extrema y secuencial vivida en dictadura, al haber sido sometida a exoneración, la detención en dos oportunidades, junto a torturas físicas y psicológicas y la posterior vida en clandestinidad.

En el mismo sentido, se presentó prueba testimonial, la que da cuenta que doña Heddy padece problemas emocionales.



Foja: 1

De igual manera, se acompañó informe psicológico de doña Tania Maipe Muñoz Navarro, suscrito por la profesional del programa PRAIS de Valdivia, doña Alejandra Henríquez Prieto, psicóloga. En dicho documento, en el atestado de conclusiones, se señala que considerando los antecedentes de la ficha clínica y la entrevista psicológica, se puede concluir la presencia de sintomatología depresiva y ansiosa recurrente, además de la experiencia subjetiva de malestar psíquico asociada a eventos traumáticos ocurridos durante su infancia. Se advierte, que estos se dan principalmente, aunque no exclusivamente, en contextos surgidos como consecuencia de los hechos represivos a los que fueron sometidos como familia durante la dictadura militar.

Por otra parte, el informe psicológico de don Bruno Renato Serrano Navarro, suscrito por doña Catalina Azua Aros, psicóloga PRAIS, da cuenta que el demandante presenta indicadores de daño psicológico asociado a una traumatización, al haber experimentado la exoneración, persecución y detención de sus padres, así como la vivencia de terror propia de la clandestinidad, en su etapa de desarrollo infantil, lo cual tiene como consecuencia el impacto de un mundo traumatizante y de un microclima familiar en el cual las personas destinadas a cuidarlo y ayudarlo a crecer no pudieron estar del todo disponibles dada las consecuencias propias de la traumatización, que las dejó disminuidas en sus capacidades de cuidado y nutrición emocional.

Por último, la evaluación psicológica respecto de la demandante Paulina Andrea Muñoz Navarro, suscrita por don Javier Castro Alfaro, psicólogo PRAIS, da cuenta de que la situación de la Sra Muñoz, responde al hecho de haber sido afectada a través de la detención y tortura de su madre, de una transmisión de consecuencias psicosociales, producto de una violencia planificada y sistemática por parte de agentes del Estado de Chile. Indica, que su afectación se constituyó como transmisión de un traumatismo por violencia de Estado por una falla en el reconocimiento del crimen de lesa humanidad contra su progenitora, en distintos niveles: familiar, social y jurídico; y debido a esta falla, lo vivido por la Sra. Heddy Navarro quedó destinada a su silenciamiento, y por ende, a la dificultad para poder elaborar lo vivido y tener la posibilidad de trabajarlo clínicamente.

Por otra parte, consta al anexo de folio 1, la carpeta de antecedentes de doña Heddy Navarro, entregada al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INHD) para su calificación como víctima de detención ilegal y torturas a manos de Agentes del Estado.



Foja: 1

Que, por su parte, el demandado Fisco de Chile, hizo agregar el oficio de folio 45, en que Jefe Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, con fecha 24 de junio de 2022 informa que el demandante doña Heddy Navarro, recibió beneficios de reparación Leyes N° 19.234, 19.992 y 20.874, en su calidad de víctima de prisión política y tortura.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, conforme a las probanzas descritas, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos narrados y del reconocimiento de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; teniendo presente además, lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que: *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en la especie, atendido los hechos asentados y considerando la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales como la integridad física a que fue sometida la demandante doña Heddy Olenka Navarro Harris, con motivo de sus detenciones y torturas por quien está llamado constitucionalmente a resguardarlos, que incluye el hecho de haberse encontrado en un estado de vulnerabilidad, producto de su embarazo, el dolor, la crueldad de las torturas recibidas, las amenazas y el daño psíquico provocados que incluso le hicieron temer por su propia vida, lo que se ve corroborado tanto por la declaraciones contenidas en la prueba testimonial de folio 30, como por el informe psicológico ya analizado, es que corresponde acceder a la pretensión de la demandante doña Heddy Olenka Navarro Harris, ante el evidente daño moral. Ello unido al temor ocasionado por las circunstancias de la época que naturalmente incrementaron dicha aflicción y a que las secuelas psicológicas son de aquellas que perduran de por vida, pues truncan su normal desarrollo, reducen sus oportunidades y merman la dignidad, todo debido a un sistemático actuar ilegal y



Foja: 1

despiadado llevado a cabo por agentes del Estado, daño que el sólo sentido común vislumbra.

Que, la totalidad de la prueba analizada en este considerando, permite a esta sentenciadora presumir de forma grave y precisa, en los términos señalados en los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil, y 1712 del Código Civil, la veracidad de los hechos señalados en la demanda, constituyendo plena prueba por la gravedad y precisión de la presunción.

Adicional a todo analizado en los párrafos precedentes, se debe tener presente también, que respecto de la materia que nos convoca, este daño moral es el único que se encuentra establecido por ley. Así, la Ley N° 19.123 reconoce clara e innegablemente la existencia de daño moral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En consecuencia, por todo lo expresado, se encuentra ampliamente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado a la demandante doña Hedy, en circunstancias de su ataque y detención, cometido por agentes del Estado en tiempos de dictadura, ilícito ya reproducido en considerados previos de esta sentencia.

Que, en cuanto a los oficios acompañados a folios 24, 25 y 37, todos referidos a las consecuencias de salud física y mental sobre las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Dictadura Militar, las que concuerdan en que eventos de detención, prisión política y tortura provoca un profundo sufrimiento psíquico, caracterizado por una intensa angustia, sensación de pérdida permanente en el tiempo, frustración, dolor en extremo aniquilante, desgarrador y autodestructivo, síntomas depresivos, desinterés en el mundo externo, familiar y laboral, pérdida de motivación, sentimientos de desamparo, entre otros. Si bien estos informes son de carácter genérico, vienen a reforzar el daño moral legalmente existente que las víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos han padecido.

VIGÉSIMO TERCERO: Que respecto de los demandantes por repercusión, esto es Paulina Andrea Muñoz Navarro, Tania Maipe Muñoz Navarro y Bruno Renato Serrano Navarro, se debe tener presente que para acceder a una indemnización de perjuicios, en el caso particular por daño moral, se deben cumplir ciertos requisitos que la haga procedente.



Foja: 1

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en señalar como uno de los requisitos que deben concurrir es el de nexo causal, vale decir la relación de causalidad existente entre el hecho dañoso y el daño que se alega. La Corte Suprema ha dicho que *“la relación de causalidad no está definida por el legislador, por lo que debe entenderse en su sentido natural y obvio... Entre un acto ilícito y un determinado daño existirá relación causal si el primero engendra al segundo y éste no puede darse sin aquél”* (Corte Suprema, 16 de octubre de 1954, RDJ, t. LI, sec. 1ª, p. 488)

En la especie no existen dudas respecto de cuál es el hecho dañoso, que como ya se ha establecido corresponde al actuar ilegal y arbitrario de los agentes del Estado en tiempos de la Dictadura Militar. No obstante lo anterior, lo que los demandantes no logran establecer con claridad, es como ese hecho se relaciona con los daños que alegan en su libelo, entre los cuales señalan sintomatología depresiva y ansiosa, en el caso de Tania; cuadros depresivos recurrentes, y trastorno bipolar de ánimo en el caso de Bruno; y consecuencias psicosociales el caso de Paulina.

Si bien el rol parental ejercido por la demandante principal (la víctima directa), se presenta como inadecuado, no es posible afirmar que dicha circunstancia es consecuencia directa de la detención ilegal y torturas experimentadas en 1974, menos aún que aquello haya influido en las afecciones de salud mental y otras circunstancias que alegan los demandantes por repercusión.

Así las cosas, no habiéndose rendido prueba suficiente para formar la convicción respecto del nexo causal entre el hecho dañoso y los daños alegados por los demandantes por repercusión, se rechazara la demanda respecto de Paulina Andrea Muñoz Navarro, Tania Maípe Muñoz Navarro y Bruno Renato Serrano Navarro.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, la demandada ha alegado que la suma sobre la que se pretende obtener una indemnización, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en estas materias y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia. Además, subsidiariamente alegó que la regulación del daño moral, debe considerar todos los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Que el oficio ORD DSGT N° 4792-12228 agregado a folio 45, del Instituto de Previsión Social, emitido con fecha 08 de marzo de 2023, hace presente que doña



Foja: 1

Heddy Olenka Navarro Harris, recibe una pensión de reparación como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados de la Comisión Valech, conforme a la Ley N° 19.992, 19.234, que fue beneficiario del Aporte Único de Reparación de la Ley N° 20.874, y de aguinaldos.

Que, aun cuando pudiéramos estimar que la pensión vitalicia recibida viene a suplir parte del sufrimiento padecido por el demandante, el otorgamiento de dicha pensión se fundamenta en una norma de carácter general, estableciendo pensiones reparatorias para un universo de víctimas, no verificando la situación particular de cada individuo y por tanto, no podría estimarse que suple de forma razonable y suficiente la totalidad del daño.

En conclusión, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

Ahora, respecto al Aporte Único de Reparación recibido por la demandada en virtud a la Ley N° 20.874, establece en su artículo 1 inciso 3° que *“Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.”*, por lo que habrá de considerarse el monto recibido por el demandante en este concepto, al momento de determinar las indemnizaciones pertinentes.

En consecuencia, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.992 y 20.874 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, correspondiendo a pagos de distinta naturaleza que cumplen con un objetivo diverso y que además emanan de una fuente distinta.

Así, habiendo establecido que no existe una incompatibilidad entre los beneficios otorgados voluntariamente por el Estado y las acciones judiciales que puedan hacer valer en Tribunales, la alegación de la demandada de tener en consideración pagos efectuados a terceros, solo será considerada parcialmente, en atención a lo analizado en los párrafos anteriores.

Por último y en lo referente a tener en consideración los montos establecidos por otros tribunales, cabe recordar que rige para todos los tribunales del país el principio de independencia, que el hecho de citar jurisprudencia en un fallo tiene por objeto simplemente reforzar los fundamentos que se plantean en cada sentencia individualmente, no operando en nuestro país la doctrina del stare



Foja: 1

decisis (ya sea horizontal o vertical). Tanto es así, que lo más cercano a ello puede encontrarse únicamente en el procedimiento laboral, en el que el legislador creó de forma extraordinaria el recurso de unificación de jurisprudencia, dando cuenta que ello constituye una excepción a la generalidad de nuestros procedimientos.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por el actor, es necesario fijar su cuantía en dinero. Cabe señalar que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja. El principio de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida tornándose caprichosa o arbitraria y no cumpla con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido.

Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la Copia de antecedentes de carpeta de doña Sara Rosa Elisabeth Seguel Arévalo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, acompañado al anexo de folio 1; el que da cuenta de que la demandante en su primera detención, se mantuvo privada de libertad por 13 días, siendo torturada mientras estaba embarazada. En su segunda detención, fue privada de libertad durante 5 días, periodo en el que fue examinada sin su consentimiento. Del mismo documento, se desprende que producto de las detenciones, presentó problemas en su embarazo y síntomas depresivos.

Por su parte, el informe psicológico emitido por PRAIS, da cuenta de que en su primera detención fue obligada a desnudarse, fue objeto de burlas, y fue amarrada a cables, todo, mientras estaba embarazada. Por otra parte, en su segunda detención fue examinada sin su consentimiento.

Cabe destacar, que de estos informes, la declaración de los testigos y el resto de prueba ya analizada, se desprende que doña Heddy Navarro Harris, padece efectos psiquiátricos.

Que, el análisis anterior, es realizado con el objeto de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima de autos.

Que, asimismo, este tribunal comprende plenamente que las sumas de dinero que se concedan al actor en nada destierran el dolor y aflicción permanente sufrido por esta, debido a las conductas ilícitas ya narradas, momento en que



Foja: 1

desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, agentes del Estado quienes por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de ellos.

En consecuencia, encontrándose acreditada la participación penal de los agentes del Estado que intervinieron la detención y tortura de la demandante, el Estado debe reparar el perjuicio ocasionado, cuya determinación concierne prudencialmente a este tribunal, toda vez que resulta imposible medir con exactitud la intensidad del sufrimiento provocado.

En atención a lo expuesto, se fijará la indemnización de perjuicios por daño moral que deberá pagar el Estado en favor de la demandante doña Heddy Olenka Navarro Harris, en la suma de \$30.000.000.

Que, del monto fijado como indemnización, deberá restarse el Aporte Único de Reparación, recibido por el demandante, en virtud de la Ley N° 20.874 y conforme lo dispone el inciso 3° del artículo 1 de la citada norma.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, la sumas ordenadas, se pagarán reajustadas de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, por lo que a este respecto, se acogerá la excepción deducida por la demandada. Respecto a los intereses legales, estos se devengarán desde la fecha en que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia y hasta la fecha de su pago efectivo, rechazándose la excepción opuesta respecto a su improcedencia.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto al resto de documentos, individualizados más no analizados en particular, en nada alteran lo resuelto por este tribunal, por lo que se omitirá pronunciamiento al respecto.

En cuanto al documento individualizado como *“Declaración jurada de doña Verónica Amanda Ubilla Navarro de fecha 03 de febrero de 2023, suscrita ante la Notaría Pública Titular de la Séptima Notaría de Santiago, María Soledad Santos Muñoz”*; en consideración a que emana de una persona que no compareció en el juicio, se le restará valor probatorio. Que, en nada altera lo resuelto, que la misma este suscrita ante Notario, toda vez que el artículo 1700 del Código Civil dispone: *“El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes”*.



Foja: 1

En cuanto a la jurisprudencia acompañada, cabe resaltar que el artículo 3 del Código Civil dispone: *“Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio.*

Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, no habiendo resultado totalmente vencida, no se condenará a la demandada al pago de las costas.

Y, VISTO ADEMÁS lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes y 38° de la Constitución Política de la República; artículos 2332, 2515 y 2497 del Código Civil Chileno; artículo 4° de la Ley N° 19.653 de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.123, 19.980, 19.992 y 20.874; artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 27° y siguientes de la Convención de Viena; artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, SE RESUELVE:

I.- Que se RECHAZA la tachada deducida contra Guillermina Alicia Gariazo Gavilán.

II.- Que se RECHAZA la excepción de falta de legitimidad activa.

III.- Que se RECHAZA la improcedencia de las indemnizaciones demandadas por los hijos, por limitación de la justicia transicional.

IV.- Que se RECHAZA la excepción de reparación satisfactiva o reparación integral, respecto de todos los demandantes.

V.-. Que se RECHAZA la excepción principal de prescripción de la acción civil de 4 años en virtud de lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil, respecto de todos los demandantes.

VI.- Que se RECHAZA la excepción subsidiaria de prescripción de la acción civil de 5 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil, respecto de todos los demandantes.

VII.- Que se ACOGE PARCIALMENTE la alegación subsidiaria de regulación que el daño moral debe considerar los beneficios consistentes en la reparación integral, solo en cuanto descontar de la indemnización, lo recibido por el Aporte Único de Reparación establecido en la Ley 20.874, rechazándose el resto de la alegación.



C-4212-2022

Foja: 1

VIII.- Que se RECHAZA, la demanda de indemnización respecto de los demandantes doña Paulina Muñoz Navarro; Tania Muñoz Navarro y Bruno Serrano Navarro.

IX.- Que se ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral respecto de doña Heddy Olenka Navarro Harris, en contra del demandado Fisco de Chile, y se CONDENA a éste a pagar en favor de la demandante doña Heddy Olenka Navarro Harris, Run 4.063.842-3, la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos) descontando lo percibido por concepto de Aporte Único de Reparación, como se señaló en el numeral anterior.

X.- Que la suma que se ordena indemnizar, se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización y devengará intereses legales desde la misma fecha y hasta su pago efectivo.

XI. Que se ACOGE la alegación de improcedencia de pago de reajustes en la forma solicitada.

XII.- Que NO SE CONDENA en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.-

C-4212-2022.

DICTADA POR DOÑA GABRIELA SILVA HERRERA, JUEZ TITULAR.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXZRHERHCXT

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, catorce de Abril de dos mil veintitrés**

